

El contenido incluye:

ANTES DEL GOLPE MILITAR

NOTAS SOBRE LA POLITICA ECONOMICA DE LA UNIDAD POPULAR EN CHILE, de Carlos Rossi.

LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR O LA EXPRESION DE LA HEGEMONIA PEQUEÑO-BURGUESA EN EL PROCESO CHILENO, de Ruy Mauro Marini.

LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO POPULAR, de Pío García E.

DESPUES DEL GOLPE MILITAR

SALVADOR ALLENDE Y LA IZQUIERDA DESVARIADA, de Darcy Ribeiro.

TEXTO INTEGRAL

En la misma colección:

CHILE, PRIMAVERA NEGRA - CARA Y CRUZ DEL GOLPE MILITAR. Testimonios, informes y documentos recopilados por Santiago Dowling.

MARINI y otros

330.983046
P837
C.1

¿Por qué cayó

¿POR QUE

CAYO ALLENDE?

Autopsia del gobierno popular chileno



Ruy Mauro Marini, Pío García y otros

RODOLFO ALONSO EDITOR

520.1150696
P 834
C 1

*pio garcía e.
ruy mauro marini
darcy ribeiro
carlos rossi*

¿POR QUE CAYO ALLENDE?

Donación: Francisco Sandoval 10/3

a 712447

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
BIBLIOTECA EUGENIO PEREIRA SALAS

RODOLFO ALONSO EDITOR

COLECCION ARGUMENTOS LATINOAMERICANOS

carlos rossi

NOTAS SOBRE LA POLITICA ECONOMICA
DE LA UNIDAD POPULAR EN CHILE

Diseñaron la portada
Canale y Ducasse

Impreso en la Argentina.
Queda hecho el depósito
que previene la ley 11.723.

© 1974, Rodolfo Alonso Editor S.R.L.,
Florida 671, Buenos Aires.

¿Qué es la Unidad Popular de Chile? ⁽¹⁾ Se trata de un frente pasablemente singular de partidos obreros reformistas y partidos pequeño-burgueses: el P. C. chileno, con 40.000 adherentes (el tercer P. C. prosoviético del mundo capitalista), hostil a la corriente castrista (rehusó participar en el congreso de la O.L.A.S. de 1967), muy organizado y estructurado e incondicionalmente stalinista (apoyó la invasión de Checoslovaquia, etc.); el P. S. de Chile, partido centrista de masas (una especie de gigantesco P. S. U.), procubano, que en 1967 proclamaba (platónicamente) su apoyo a la vía armada en Chile, dotado de una juventud y un ala izquierda trabajadas por el M. I. R. y por corrientes trotskistas, blando y amorfo en su organización partidaria; el M.A.P.U. (Movimiento de Acción Popular Unificada), ala izquierda que se escindió de la Democracia Cristiana, se radicalizó e hizo anticapitalista al dar recientemente un giro a la izquierda luego de haber tenido una posición cercana al P. C.; el Partido Radical, hermano chileno de su homónimo francés, pero cercenado por dos escisiones de derecha que se sumaron al frente burgués opuesto al gobierno de Allende, es un viejo partido pequeño-burgués que accedió al poder muchas veces

(¹) Este artículo de Carlos Rossi, así como los de Ruy Mauro Marini y Pío García E. que también se incluyen en este libro, fueron escritos *antes* del golpe militar fascista que derrocó al gobierno de Salvador Allende. En cambio, el trabajo de Darcy Ribeiro que completa este volumen, fue escrito *después* del citado golpe. (N. del E.)

y hoy está en decadencia acelerada; dos grupúsculos electorales bastante insignificantes: la Acción Popular Independiente y el Partido Social-Demócrata. A esta lista se agregó en 1971-1972 la Izquierda Cristiana (I. C.), última escisión de la Democracia Cristiana que se radicalizó todavía más rápido que el M.A.P.U., situándose a la izquierda de la Unidad Popular y colaborando frecuentemente con el M.I.R. La hegemonía reside por lo tanto en los partidos obreros reformistas y especialmente en el P.C., que es el que tiene el proyecto político más coherente y la solidez organizativa necesaria para imponerlo. La situación no deja de recordarnos la de España en 1936-1937, con un Allende a medio camino entre Largo Caballero y Negrín...

En cuanto al programa de la Unidad Popular, su objetivo declarado no es una "democracia adelantada", sino "empezar la construcción del socialismo en Chile" (como textualmente lo dice su título). Efectivamente, el capítulo sobre las medidas económicas propone cambios importantes, como la nacionalización de los principales sectores de la economía:

"Serán integradas al sector de las actividades nacionalizadas las siguientes ramas:

- 1) las grandes minas de cobre, salitre, yodo, hierro y carbón;
- 2) el sistema financiero del país, en particular los bancos privados y los seguros;
- 3) el comercio exterior;
- 4) las grandes empresas y monopolios de distribución;
- 5) los monopolios industriales estratégicos;
- 6) en general, todas las actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, como la producción y distribución de energía eléctrica; los transportes terrestres, marítimos y aéreos; la producción, refinamiento y distribución del petróleo y sus derivados, el gas; la siderurgia,

el cemento, la petroquímica y la química pesada, la celulosa, el papel."

En un manifiesto de octubre de 1970 el M.I.R. subraya que "las medidas que propone el programa de la Unidad Popular no pueden ser absorbidas pasivamente por el sistema capitalista de Chile". La cuestión consiste más bien en saber si va a ser aplicado ya que, en 1973, dos años después del triunfo electoral de Allende, se está muy lejos de haber cumplido con las principales medidas del programa. Por la sencilla razón de que el poder político real, el aparato político-militar existente, continúa siendo el de la burguesía. En este punto se encuentra la principal debilidad del programa de la Unidad Popular, que no es un programa de transición, ya que prácticamente no dice nada respecto al problema crucial del aparato del Estado. Con referencia al mismo el programa contiene vagas generalidades sobre "la incorporación del pueblo al poder estatal" y tiene palabras llenas de una triste ingenuidad para el Ejército: "Rechazamos el empleo de las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extranjeras..."

Tras haber dicho esto sería apresurado creer que la Unidad Popular fue desde el principio una nueva forma del viejo Frente Popular, como la que conoció Francia en 1936 y Chile en 1938. Pareciéndoselo completamente desde el punto de vista de su carácter reformista y electoralista, la Unidad Popular se distinguía del Frente Popular en dos aspectos esenciales: la composición y el programa. El Frente Popular era un frente electoral de partidos obreros reformistas y partidos burgueses/pequeño-burgueses bajo la hegemonía de estos últimos y con el objetivo declarado de "defender la república (burguesa) contra el fascismo" para una honesta gestión de los asuntos de la burguesía (León Blum dixit). La Unidad Popular era un frente electoral

de partidos obreros (reformistas) y partidos pequeño-burgueses, bajo la hegemonía de los primeros y con el objetivo declarado de "empezar la construcción del socialismo". Sin embargo, con la formación del gabinete U.P.-militares y la entrada de los generales en los puestos claves (¡Ministerio del Interior!), se puede hablar de un cambio de naturaleza del gobierno de Allende que se transforma así, en cierto modo, en una alianza de clases tendiente a un "Frente Popular *sui generis*" con los militares en el papel de barreras de contención de la burguesía, papel que desempeñaba el Partido Radical en el esquema tradicional.

¿Cuál es el balance de la política económica de la Unidad Popular? Durante el primer año del gobierno de Allende se nacionalizaron algunas empresas imperialistas (la minas de cobre) y chilenas (textiles, aceros, etc.), se aumentaron los salarios y se congelaron los precios. Un colaborador cercano de Allende declaraba, en diciembre de 1970, a *Le Nouvel Observateur*: "La derecha acaba de perder el poder político: ahora nuestro objetivo es quitarle el poder económico, no en ocho días, sino en algunos meses, sector por sector, golpe por golpe y legalmente. Si antes de un año no alcanzamos a poner todos los sectores claves de la economía bajo control del Estado y logramos un repunte en los tres terrenos donde la situación es más crítica —vivienda, huelgas e inflación— se podrá decir que habremos fracasado" (*Le Nouvel Observateur*, 14-12-1970.)

Dos años más tarde, ¿cuál es el resultado de esta política económica "gradualista", de introducción "legal", "paso a paso", del socialismo?

El gobierno de Allende experimenta actualmente crecientes dificultades: inflación galopante (114,3 % en 1972) y crisis de abastecimiento, con desaparición del mercado de numerosos comestibles (especialmente carne) y con la

consiguiente importación masiva de alimentos, lo que agrava el déficit de la balanza de pago y agota las reservas de divisas.

Los problemas económicos del gobierno de la U.P. (Unidad Popular), evidentemente, son explotados demagógicamente por la derecha chilena que trata de aprovechar el descontento popular para denunciar los "males del socialismo". Este tema halla un eco lejano en la crapulosa propaganda anticomunista de la U.D.R. en Francia que presenta a Chile como un horrible espantajo "socialista".

Nuestra respuesta a este lavado de cerebro es simple: las dificultades económicas de Chile no se deben al socialismo, sino precisamente a la *ausencia de socialismo*. Es la incapacidad del gobierno no reformista de Chile para poner en cuestión los fundamentos del capitalismo y el poder de la burguesía lo que explica sus actuales problemas económicos.

El gobierno de la U.P. no ha roto la hegemonía burguesa sobre la economía: el 70 % de la industria continúa en manos del capital privado, como la mayor parte de la red comercial, bancaria, etc. Además, la Unidad Popular *indemnizó* a los pocos capitalistas expropiados, lo que conduce a que los trabajadores paguen el precio del reformismo y financie directamente a los peores enemigos de la clase obrera (y del mismo gobierno de Allende).

Es evidente que la burguesía usó su poderío económico, casi intacto, para *sabotear activamente* la política económica de la Unidad Popular con los innumerables medios de que dispone:

- el retiro de los depósitos bancarios;
- la huida de capitales hacia el exterior: en 1972, asciende a 270 millones de dólares oficialmente declarados (mucho más importantes son aún las transferencias clandestinas);

—la detención de las inversiones: los capitalistas no sólo rehúsan agrandar o modernizar sus instalaciones, sino que además tienden a no mantener el material existente; de este modo, mientras que en algunas sociedades las reservas se distribuían entre los accionistas, en otras los jefes vendían parte del material, con frecuencia para evacuar los capitales hacia el exterior (cf. Catherine Lamour, *Le Chili*, p. 169);

—el sabotaje a la producción agrícola: frente a la amenaza de una reforma agraria, los hacendados dejan de hacer inversiones o mandan clandestinamente su ganado a la Argentina; en las regiones donde la reforma tuvo lugar (de acuerdo con la ley burguesa del gobierno demócrata cristiano), los campesinos ocupan las peores parcelas, sin los capitales, los abonos, las semillas, las instalaciones y las máquinas, que se mantienen concentrados en manos del antiguo propietario, en “la reserva” de 80 hectáreas. En estas condiciones, ¿puede asombrarnos que baje la producción agrícola y falten comestibles en los mercados de las ciudades?

—el almacenamiento clandestino de mercaderías, para provocar una escasez artificial y poder venderlas a precios exorbitantes en el mercado negro: en particular, se hace “desaparecer” los productos sometidos a un control de precios. En algunos casos, los fabricantes, pura y simplemente dejan de producir los artículos de precios controlados: los fabricantes de calzado, por ejemplo, abandonaron algunos modelos baratos cuyos márgenes de ganancia estimaban demasiado reducidos...

Esta política sistemática de sabotaje económico es, por una parte, la respuesta “instintiva” de la burguesía a la “inseguridad” suscitada por un gobierno dominado por partidos obreros (incluso si son reformistas); por otra parte, un plan deliberado que apunta ya sea a derribarlo a Allende creando una situación de “caos económico”, ya sea a

ganar las elecciones de marzo de 1973, explotando el descontento con las dificultades (que ella misma creó...)

¿Qué solución propone el gobierno de la U.P., en particular el P.C. chileno, que es su fuerza reformista más coherente y más obstinada, ¡“La batalla de la producción!” “Primero producir”, dicen los reformistas chilenos a los trabajadores (como el P.C.F. en 1945: todo parecido es pura casualidad...), sustituyendo así por una pseudo-solución económica a la verdadera solución política del problema.

¿Cómo movilizar a los trabajadores para que aumenten la producción si éstos continúan trabajando para los patrones, si la producción misma continúa dentro de los marcos de la explotación capitalista y si los beneficios continúan yendo a los bolsillos de la burguesía? Transformar en tarea prioritaria la batalla de la producción conduce a desmovilizar políticamente a los trabajadores y a desviarlos de la verdadera batalla, *la batalla por el poder*, la única capaz de resolver definitivamente los problemas económicos, extirpando el mal en sus raíces.

Lo que no comprenden los reformistas es que hay dos lógicas contradictorias e irreconciliables: la lógica capitalista de la ganancia y la lógica de la planificación socialista. Toda tentativa de “mezcla”, conciliación o coexistencia de estas dos lógicas es imposible y está infaliblemente destinada al fracaso. La política económica de la Unidad Popular es suficientemente “izquierdista” como para irritar e inquietar a la burguesía, *al mismo tiempo que le deja el poder económico real*. El resultado inevitable es el sabotaje económico por parte de esta burguesía, la que usa los resortes de poder en sus manos como arma contra los trabajadores y contra el gobierno reformista. Nada sería más falso que pensar que el gobierno de Allende es un gobierno “de la burguesía” o una simple continuación del refor-

mismo demócratacristiano de Frei. Sus lazos con el movimiento obrero organizado le dan características específicas, pero su política reformista y burocrática *provee a la burguesía las armas* para derribarlo o neutralizarlo totalmente.

Hay otra solución posible, una solución *política y revolucionaria*, que es lógica, clara y coherente: la solución propuesta por el M.I.R. chileno:

"Si los patrones se niegan a producir, a transportar, a distribuir y comercializar, el pueblo puede y debe tomar en sus manos esas actividades. La clase obrera no necesita de los grandes capitalistas para cumplir con estas tareas...

"La tarea fundamental de los trabajadores, a fin de resolver las crisis y eliminar las causas que la originan, es la expropiación de los grandes capitales de la industria y del comercio, de los transportes, de la agricultura y de la minería, como también de los medios de comunicación de masas que les sirven. Esta tarea debe ser completada por el control obrero de las actividades que quedarían en el sector privado.

"Esto sólo se podrá lograr desarrollando un poder popular alternativo del poder patronal y burgués. Este poder popular sólo podrá surgir de la lucha y de la movilización del pueblo, de su unificación por abajo y su organización a nivel comunal, creando los Consejos Comunales de Trabajadores." (Declaración del M.I.R. del 19-10-1972 en *Punto Final*, N° 169, Santiago, 24-10-1972).

En contra de la política de acaparamiento y especulación de los grandes comerciantes promotores del mercado negro las masas constituyeron las J.A.P. (Juntas de abastecimiento y control de los precios, compuestas por delegados de los sindicatos, asociaciones de amas de casa, consejos vecinales, etc.).

Por otra parte, siguiendo el ejemplo de algunas regiones campesinas (Cautín) en algunas ciudades, comunas o

barrios (Cerrillos, suburbio obrero de Santiago, etc.) se han formado *Consejos Comunales de Coordinación* que reúnen a delegados de fábricas, sindicatos, partidos obreros (sobre todo P.S., M.A.P.U. y M.I.R.), J.A.P., grupos de autodefensa de los barrios, etc. Estos Consejos de Coordinación se desarrollaron sobre todo durante la crisis de octubre de 1972 (la "huelga burguesa" de los transportes y del comercio) y constituyen un primer embrión de *doble poder*. Sólo reforzando estas formas de poder obrero, creando en todas partes grupos de autodefensa armada y movilizándolo a las masas en la base para que luchan por sus intereses, se puede ganar la verdadera batalla, la batalla por el poder, la batalla por el socialismo.

La moraleja de la historia también es válida para Francia...

Publicamos aquí dos artículos sobre la política económica de la Unidad Popular chilena. El primero es de Rui Mauro Marini, economista marxista brasileño (autor del libro *Sous-développement et révolution*, Maspero) exiliado en Chile, cuyos análisis la izquierda chilena revolucionaria utiliza con frecuencia. Globalmente estamos de acuerdo con el contenido de su artículo, pero nos parece incompleto: haría falta subrayar que la raíz del reformismo no es económica, sino *política*: la aceptación de la "legalidad", es decir, de los marcos del Estado burgués.

El segundo artículo es de Pío García, un profesor de izquierda del Centro de Estudios Sociales de Chile, y fue publicado en la revista de esta institución (*Sociedad y Desarrollo*, N° 1, marzo 1972). Se trata de una polémica con otro artículo de la misma revista, escrito por Sergio Ramos, uno de los ideólogos político-económicos del P.C. chileno. Sergio Ramos, abiertamente reformista, "renueva" la teoría marxista con una contribución "original": la conquista del poder político "pedazo por pedazo": primero el Ejecutivo, después el Legislativo, después el resto... La presencia de

Carlos Rossi

los partidos obreros (reformistas) dentro del gobierno significa, para aquél, "una situación de doble poder" en el interior del aparato del Estado que, de este modo, será ganado poco a poco por el proletariado.

Pío García descarta con razón estas utopías revisionistas, pero su artículo se queda a medio camino, en la medida en que defiende sin reservas la política económica de la Unidad Popular (incluidas la "batalla de la producción", la indemnización de los capitalistas nacionalizados, etc.) y que cede a veces a la tentación del economicismo, al escribir por ejemplo que el proceso de formación del sector de la propiedad social "constituye el medio principal, si no el único, por el que se crea y organiza el poder real del proletariado que permitirá reemplazar al actual poder del Estado". Pues bien, el medio principal de "organizar el poder del proletariado" no es la nacionalización por arriba y con indemnización de algunas empresas, sino la movilización revolucionaria por abajo de los trabajadores, movilización política y político-militar dirigida al objetivo central de la lucha: la toma del poder político por medio de la destrucción del aparato del Estado burgués.

Febrero de 1973.

Traducción de Teodoro Lecman

ruy mauro marini

LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO
DE LA UNIDAD POPULAR O LA EXPRESION
DE LA HEGEMONIA PEQUEÑO-BURGUESA
EN EL PROCESO CHILENO

Al asumir el gobierno, la Unidad Popular encontró al país sumido en una depresión económica que databa de 1967 y había alcanzado su punto más bajo en 1970.

Por consiguiente, junto a las medidas específicas de su programa, la Unidad Popular tuvo que aplicar una política destinada a restablecer a corto plazo el nivel de la actividad económica.

Esta política se fijaba dos objetivos: incentivar el consumo y aumentar la tasa de inversión.

Veremos los dos puntos por separado:

I. LA INCENTIVACION DEL CONSUMO.

La Unidad Popular contaba con el hecho de que importantes capacidades productivas, que estimaba en un 40 % del potencial total de la industria, se hallaban inactivas; esta situación era el resultado de la presión sistemática ejercida sobre los salarios y en menor medida sobre otros ingresos durante los años sesenta (a débil poder de compra, débil demanda).

Este análisis llevó a la Unidad Popular a impulsar una redistribución del ingreso: <al aumentar el poder de compra de las capas populares y medias, esta redistribución provocaría la utilización plena de las capacidades productivas y el crecimiento de la producción industrial sin aumentar por ello las inversiones.>

La redistribución del ingreso supone la existencia de dos mecanismos complementarios: aumentos de salarios superiores al alza del costo de la vida y un congelamiento

estricto de los precios. Fue esto fundamentalmente lo que se hizo en 1971.

Otra forma de reubicar el consumo es a través de los gastos públicos, especulando con el déficit presupuestario.

Aumentando sus gastos corrientes (salarios, etc.), el gobierno contribuye a inflar la capacidad de consumo y ayuda a la expansión del mercado.

Aumentando sus gastos de capital (inversiones en la construcción de viviendas, etc.), el gobierno influye no sólo sobre la demanda de bienes de consumo (creando mayor número de empleos y por lo tanto de salarios), sino también sobre la de bienes intermedios y de capital (cimiento para la construcción, etc.).

Esto también se hizo en 1971.

II. LOS PROBLEMAS CREADOS POR LA INCENTIVACION DEL CONSUMO

A) Desabastecimiento e inflación.

A fin de 1971 ya se veía con claridad que el crecimiento observado en la producción industrial no podía seguir satisfaciendo la demanda creciente y que la redistribución del ingreso, tal como había sido realizada, no bastaba para responder a los problemas planteados.

La falta relativa de elasticidad de la oferta de bienes se debía fundamentalmente al agotamiento de las capacidades productivas antiguamente inactivas.

Efectivamente, esta inactividad se había mostrado menos importante de lo que se creía (alrededor del 25% según los círculos capitalistas).

Por otra parte los problemas surgidos en el terreno de las importaciones se tradujeron en una falta de bienes y piezas de repuesto.

Todos estos problemas se manifestaron a nivel del aprovisionamiento del consumidor. Pero abramos un paréntesis: no todos los casos de desabastecimiento obedecen a razones de este tipo. Algunos son el resultado del contrabando hacia el exterior, estimulado por el bajo valor del dólar y la producción de algunos bienes en Chile a precios menores que en otros países.

Otros obedecen a la constitución de stocks comerciales por acaparadores (caso que es sin embargo siempre un fenómeno temporario que tiene lugar mientras el estado de la oferta lo permite).

Otros casos, por último, son el resultado del sabotaje perpetrado por los capitalistas o bien de la incompetencia de los funcionarios gubernamentales.

Retomando ahora: estas situaciones de escasez, exceptuando los casos de sabotaje e incompetencia, tienden a ser resueltas, en una economía de mercado, con un alza de los precios.

¿Qué significa esto? Que al aumentar los precios se reduce el consumo de los de menor ingreso, restableciendo así el equilibrio entre la oferta y la demanda. En otros términos, al disminuir el poder de compra del pueblo se limitan las presiones sobre la oferta.

Esta causa de inflación actúa al mismo tiempo restrictivamente sobre la amplitud de la redistribución de la renta.

Por otro lado, el simple reemplazo de las capacidades inactivas, sin hacer nuevas inversiones, y por lo tanto, sin elevar el nivel tecnológico, actúa negativamente sobre la productividad.

Para comprender este fenómeno basta saber que, en general, las capacidades de producción activadas corresponden a nuevas instalaciones de una productividad menor que la media.

Se uso encarece la producción y disminuye los ingresos puesto que lleva al capitalista a ejercer presión para que sean aumentados los precios de venta.

Los aumentos de salarios, al influir sobre el costo de la producción, tienen el mismo efecto.

También hay que señalar que son las empresas no monopolistas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, las que sufren más estos efectos: son éstas las que generalmente tienen las máquinas más viejas y pagan más salarios en relación a su capital total (efectivamente, en términos relativos, emplean más mano de obra). Son éstas las más desfavorecidas por el congelamiento de los precios.

De este modo no tiene que sorprender su oposición creciente a la política económica del gobierno.

Por otra parte, también hay que recordar que, para hacer frente a la baja productividad del sector social y tratar de mantener su rentabilidad, la Unidad Popular recurrió a la batalla por la producción, fundada esencialmente en el trabajo voluntario.

Dado el contexto en que tuvo lugar, caracterizado por el congelamiento general de los precios, esta batalla no hizo más que aumentar los beneficios de los capitalistas privados, que de este modo podían adquirir materias primas a bajo precio.

Para que la batalla por la producción se tradujese en un excedente en beneficio del gobierno, se hubiera debido manipular los precios y establecer precios más elevados para las materias primas vendidas a los capitalistas bloqueando al mismo tiempo los precios de venta de sus productos. Esto hubiera permitido, en los hechos, la liquidación de los beneficios del sector privado.

Sea como sea, la llamada "inflación de los costos" provocada por el aumento de salarios y la baja de la produc-

24 Si, pero esto fue en una segunda fase

tividad también tiende a resolverse en un alza del nivel general de los precios.

He aquí otro factor todavía que gravita fuertemente sobre la redistribución de los ingresos.

B) Reproducción ampliada de la vieja economía capitalista.

Reactivar una economía, sin preocuparse al mismo tiempo de cambiar sus estructuras, equivale a estimular que se reproduzca exactamente tal cual es.

Pues bien, la economía chilena, en razón de la presión ejercida tradicionalmente sobre los salarios, se desarrolló de tal manera que la industria de bienes de consumo comunes (alimentación, calzado, textiles, etc.), que depende del poder de compra del pueblo, es poco dinámica. Crece lentamente, y es poco rentable, mientras que la industria de bienes suntuarios (televisión, automóviles, etc.), que depende del poder de compra de las capas medias ricas y de los capitalistas es, en cambio, dinámica.

En consecuencia, la política económica no podía fijarse como objetivo la reproducción ampliada de esta estructura productiva, con su cada vez más antipopular distribución del ingreso; más bien debía apuntar a romper esta estructura.

De haberse planteado y logrado este objetivo, la incentivación del consumo habría provocado una fuerte expansión de la industria de carácter popular (que por lo demás fue el sector preferencial en la política de estatización) y una crisis en el mercado de los bienes suntuarios.

Esta crisis habría sido decisiva, porque habría afectado al sector más dinámico de la industria, aquel en que se encuentra la burguesía más fuerte junto a un proletariado moderno y organizado: el gobierno habría debido estar preparado entonces para aprovechar la crisis o una simple amenaza de crisis tomando rápidamente en sus manos

este sector y poniéndolo al servicio de las grandes masas (producción de ómnibus y tractores antes que de autos de turismo, etc.).

En los hechos, la crisis no se dio. Por el contrario, la economía continuó desarrollándose como antes, sólo que con más dinamismo: la industria popular aumentó su producción y sus ventas, pero la industria suntuaria también, y ampliamente. ¿Por qué?

En primer lugar, porque la redistribución del ingreso en favor de los sectores más atrasados fue tímida. Las capas acomodadas continuaron ganando mucho y alimentando así la demanda de bienes suntuarios.

En segundo lugar, porque los capitalistas pudieron guardarse la totalidad de sus beneficios: no fue creado ningún mecanismo para transferirlos al gobierno.

Como los capitalistas no habían hecho absolutamente ninguna inversión en 1971, pudieron usar parte de estos beneficios para aumentar sus consumos suntuarios; la otra parte la colocaron prudentemente en el exterior.

En tercer lugar, porque el congelamiento de los precios, aplicado en tales condiciones, permitió a los capitalistas procurarse materias primas y fuentes de energía a bajo precio. Buena parte de las mismas, efectivamente, fue distribuida a bajo precio por el sector público (el acero, el petróleo, el carbón, la electricidad, los productos textiles, etc.).

Siendo los sectores más dinámicos de la industria los que tienen la más alta productividad, el mejor nivel tecnológico y en consecuencia el menor empleo de mano de obra, sus costos de producción (y por lo tanto sus beneficios) sufren más por las variaciones en el precio de las materias primas, la energía y los bienes de producción intermedios que por las variaciones en los salarios. Por ello los aumentos de salarios los afectaron poco, en cambio se vieron fuerte-

mente beneficiados por el congelamiento de los precios de las materias primas.

C) Fracaso de la política de incentivación del consumo.

Estas son las razones por las que la política económica a corto plazo, que pretendía incentivar el consumo por medio del desarrollo del mercado, condujo al fracaso. Esta política, no sólo desencadenó una inflación que llevó a la restricción del consumo, sino que, sobre todo, la recuperación obtenida se limitó a estimular la reproducción ampliada de la vieja economía capitalista. Economía cuya tendencia fundamental es la restricción sistemática del consumo popular en beneficio del consumo suntuario de las capas privilegiadas de la burguesía y la pequeño-burguesía.

III. EL PROBLEMA DE LA ACUMULACION

En Chile, las inversiones públicas representan más de la mitad de las inversiones totales. El gobierno, por su cuenta, invierte directamente en las empresas del sector público, en los trabajos de infraestructura, en las viviendas, etc.

Por otra parte, puede considerarse que los créditos y subvenciones acordados a los inversores privados por la C.O.R.F.O. y otras agencias gubernamentales son inversiones públicas indirectas.

Para invertir, el sector público recurre a tres fuentes principales: los impuestos, los beneficios extraídos de la exportación y los créditos del exterior. Una cuarta fuente puede ser el déficit presupuestario, o la emisión de moneda sin respaldo.

En el periodo considerado la estructura fiscal del país no cambió; las entradas públicas provenientes de los impuestos tuvieron que crecer, dada la recuperación general de la economía, pero en mucha menor medida de lo que

lo habrían hecho si se hubiesen aumentado significativamente las cargas de la burguesía.

Tal como está actualmente, la estructura fiscal es incapaz de sostener una política de inversiones firme.

El lugar más importante en el presupuesto nacional lo ocupan los beneficios extraídos de la exportación. Los que no pudieron crecer en forma significativa el último año, dado el carácter reciente de la nacionalización del cobre y la baja de los precios de este metal en el mercado mundial. La devaluación del dólar decidida por el imperalismo de los EE. UU., afectó todavía más el nivel de estos ingresos.

Los créditos en el exterior quedaron prácticamente paralizados, como consecuencia de las presiones de los EE. UU. acerca de la negociación de la deuda. Los aportes de los países "socialistas" fueron de poca importancia. Pero esto también se debe a la incompetencia de los funcionarios del gobierno: los créditos son acordados en función de proyectos precisos; sin embargo, durante las negociaciones de fines de 1971, los representantes chilenos aparecían casi siempre llenos de esperanzas, pero sin proposiciones concretas para la obtención de créditos.

La negociación de la deuda fue poco favorable al gobierno, en gran parte debido a la debilidad de la posición chilena en la materia.

Hasta el presente, los acuerdos celebrados en el marco de la Conferencia de París con los gobiernos y los bancos de los países acreedores no han sido concluidos, y lo que es peor: en enero próximo habrá que reabrir la negociación puesto que en París sólo se trataron los problemas concernientes al año 1972.

Mientras tanto, la posibilidad para Chile de contraer deudas, incluso con los países "socialistas", queda limitada este año por lo que debe pagar como amortizaciones, que ascienden a cerca de sesenta millones de dólares.

¿Por qué no se suspendió la deuda?

Continuemos. Todo esto frenó las inversiones públicas. Y sin embargo, hay algo más grave: la falta de planificación de las nuevas inversiones a hacer en los sectores productivos. La estructura tradicional de inversión pública, que privilegia la construcción, ha sido mantenida.

Lo que es nuevo esencialmente es el desprendimiento de recursos suplementarios para recobrar capacidades de producción existentes (estatización de industrias e indemnización de los propietarios de tierras).

Estas operaciones raramente se pagan al contado: van a engrosar el monto de las deudas hacia el sector privado.

Nadie, salvo la derecha, puede quejarse legítimamente de que se hayan empleado recursos para la compra de capacidades de producción existentes, dado que de ello dependía la formación del sector social. Las cosas no están todavía como para poder expropiar a la burguesía sin indemnización. Pero es muy grave en cambio que el gobierno no haya buscado la forma de hacer financiar estas indemnizaciones por la misma burguesía.

El aumento de las cargas fiscales sobre la burguesía era y sigue siendo una necesidad: ello permitiría obtener los fondos para hacer frente a las indemnizaciones, pero también para financiar las inversiones públicas en nuevas producciones. Además no hay que olvidarse de que la recuperación económica puso en manos de los capitalistas grandes beneficios que habría que haber recuperado para beneficio del pueblo.

Pero no fue así. El gobierno no se atrevió a meterse con estos beneficios. Ciertamente hubo un tímido intento en este sentido en el primer semestre del año pasado; pero la reacción hostil de la burguesía y el retroceso político de la Unidad Popular que se produjo a continuación lo llevaron a abandonar todas las pretensiones en este terreno.

El gobierno no se limitó solamente a no tocar los beneficios de los capitalistas, sino que continuó acordándoles fondos por conducto de los gastos públicos y de diversos mecanismos de crédito, fondos que la burguesía no invirtió. Como lo hemos visto, la misma se contentó con promover la huida de capitales y aumentar su consumo suntuario.

En conclusión, ya sea por el lado de las inversiones públicas o por el de las privadas, la capacidad productiva del país no aumentó el último año. Esta situación reforzó el atraso que había tomado la oferta de bienes sobre la demanda, reforzando así los factores que trajeron inflación y escasez.

Pero de mayor gravedad todavía es que el gobierno no haya utilizado el excedente creado por los trabajadores para inversiones que comenzaran a modificar realmente la estructura de producción, para romper con el modelo de la vieja economía capitalista, que se caracteriza (esto nunca se repetirá demasiado) por una no-satisfacción creciente de las necesidades de las grandes masas.

IV. EL CARACTER DE CLASE DE LA POLITICA ECONOMICA.

Un elemento determinante en la política económica del gobierno de la U.P. ha sido el deseo de consumir de la pequeño-burguesía que constituye uno de los sectores de base de la alianza de clases sobre la que reposa la Unión Popular. Después del 4 de noviembre, esta pequeño-burguesía concretó su influencia en el aparato del Estado a través de la presencia de sus economistas y tecnócratas en los puestos de responsabilidad.

Esta pequeño-burguesía comprende vastos sectores alejados de la producción, y sus dirigentes pertenecen a esos sectores (políticos profesionales, funcionarios, tecnócratas). Tiende a considerar la economía en el nivel de las apa-

riencias: se interesa en los impuestos, en los salarios, en los precios, es decir, en todo lo que afecta su capacidad de consumo, sin intentar comprender cuál es la fuente misma de esta capacidad de consumo.

En su mayor parte, ve la capacidad de consumo como un don natural, que participa de la creación divina: no puede comprender que ésta encuentra su fuente en aquella porción que le es transferida de la plusvalía que los capitalistas arrancan a los obreros. Es por esta razón que la pequeño-burguesía, cuando se pone a dirigir la economía, ataca los problemas tal como se le aparecen, es decir, bajo el ángulo del consumo.

Pero las cosas no pueden acabar aquí. El consumo global es siempre la suma del consumo de los trabajadores (tomado sobre sus salarios) y de los consumos de los capitalistas y las capas medias (tomados sobre la plusvalía). El consumo de los subproletarios, de poca importancia, también proviene de las migas que les arrojan los capitalistas.

Por esta razón, las reivindicaciones que hacen al problema de la capacidad de consumo tienen mucho mayor eco en la pequeño-burguesía y en los sectores subproletarios. Si se sustrae el consumo global de la producción global, queda un excedente que se puede destinar a la acumulación.

Por lo tanto, lo que permite el crecimiento del consumo es el aumento de la producción, que por su parte depende de la acumulación.

Solamente las inversiones, al crear nuevos empleos, garantizan realmente la elevación del nivel de vida de los trabajadores. Por una parte, suscitan un aumento de la masa de salarios pagados y, por otra parte, disminuyen el ejército de reserva, lo que a su vez acrecienta la combatividad de los trabajadores, y por lo tanto puede favorecer los aumentos de salarios.

Esto sólo es verdad cuando las inversiones se realizan en el marco de una economía no capitalista, que no produce para la ganancia.

La influencia del deseo de consumir de la pequeño-burguesía en la política económica de la Unidad Popular ha sido justificada por el hecho de que era necesario incentivar la economía y reforzar al mismo tiempo la base política del gobierno.

Pero también, al mismo tiempo, *estas medidas no se acompañaron de un trastocamiento de las estructuras productivas.*

De hecho este deseo de consumir quedó como elemento central y esto paralelamente al desarrollo de tendencias conciliatorias con la burguesía y a una voluntad de resolver los problemas únicamente por medio de medidas económicas.

Estas dos tendencias son las dos caras de una misma política: es porque piensa que hay una "buena" burguesía (la burguesía no monopolista y no imperialista) que puede ser ganada para el gobierno, que la Unidad Popular estima que hay que satisfacer sus intereses económicos.

La base misma de esta política conciliadora son los reformistas que, en el seno del movimiento obrero, encarnan la ideología pequeño-burguesa. Su proyecto es estorbar la lucha de clases, que la pequeño-burguesía teme, y llevar al proletariado a una política de colaboración con la burguesía, que permitiría convencer a aquélla de los beneficios del socialismo. De este modo los tecnócratas pequeño-burgueses y los reformistas obreros marchan tomados de la mano, representando los intereses de la pequeño-burguesía en el plano económico (el deseo de consumir) como en el plano político (la colaboración de clases).

Junio de 1972.

Traducción de Teodoro Lecman

pío garcia e.

LA POLITICA ECONOMICA DEL
GOBIERNO POPULAR

Consideraciones políticas *

Este artículo fue publicado en el N° 1 de la revista *Sociedad y desarrollo* (Santiago de Chile, enero-marzo de 1972). (N. del E.)

ADVERTENCIA

La publicación del presente trabajo, que no fue elaborado con tal propósito y que sólo tiene lugar a fin de contribuir al desarrollo de una discusión necesaria, obliga a ciertas explicaciones previas.

Lo que se ha intentado, de una manera incompleta y no enteramente manifiesta en el orden de exposición, es caracterizar la especificidad de la lucha por el poder para establecer el socialismo en Chile en condiciones de vigencia del Gobierno Popular; mostrar el papel decisivo que en tal coyuntura desempeña el desarrollo de la política económica; y la medida en que ésta se ha venido materializando, en relación a determinados problemas fundamentales, en forma de contribuir a un desarrollo general de carácter revolucionario del proceso político. No hay por lo tanto en el texto ni un análisis de las insuficiencias y dificultades presentes al interior de la propia conducción económica, ni tampoco un análisis del proceso político y su conducción general por parte de la izquierda, tal cual se han desenvuelto en la práctica.

Por otra parte, debo señalar que el presente trabajo reúne algunas notas preparadas para el compañero Pedro

(*) Este artículo hace referencia a un trabajo de Sergio Ramos. Ramos ha modificado sin embargo la forma original de su trabajo para clarificar su posición en los aspectos criticados por Pío García. Si el lector desea conocer la formulación original de Ramos debe consultar a la publicación del CESO: "Chile, una economía de transición".

Pío García E.

Vuskovic, Ministro de Economía del Gobierno Popular, con ocasión de diversas intervenciones públicas que le correspondió efectuar y en las que se recogió parte de estas consideraciones. (*)

En razón de este origen, diversos aspectos abordados en el texto, así como su contenido total, son producto de una elaboración en que el aporte del compañero Vuskovic ha sido principal. De manera más general, el presente trabajo es resultado de las continuas discusiones sostenidas por el grupo de colaboradores directos del actual Ministro de Economía, y en forma particular, por lo que respecta a este texto, de las contribuciones de los compañeros Jorge Bertini, Alejandro Schejtman y Ernesto Torrealba. En cierto modo no me ha correspondido sino recoger planteamientos que han sido elaborados en conjunto, organizarlos para su exposición, y darles una forma determinada. Por cierto, ninguno de los compañeros mencionados es necesariamente solidario de todos y cada uno de los planteamientos contenidos en el texto ni responsable de la formulación general que se les ha dado.

Quisiera, finalmente, agradecer los comentarios críticos hechos al original por Marta Harnecker, Ruy Mauro Marini y José Valenzuela, los que permitieron corregir algunos errores y sobre todo adquirir una conciencia todavía más clara sobre las limitaciones generales del trabajo.

(*) Principalmente en la Clase Magistral dictada en julio de este año para inaugurar el Semestre Académico de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad de Concepción y en la Exposición efectuada en la Sesión Inaugural del Symposium sobre "Transición al Socialismo: la experiencia chilena" organizado por CESO y CEREN en octubre de 1971. (N. del A.)

I. LOS FUNDAMENTOS POLITICOS DE LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO POPULAR.

1. La naturaleza de la política económica del Gobierno Popular.

No es necesario reproducir aquí el análisis de la economía del país y su desarrollo, en que se fundó el planteamiento del programa económico de la Unidad Popular.

El Programa Básico en su conjunto arranca de la convicción científica históricamente confirmada de que el subdesarrollo de Chile es la consecuencia inevitable del tipo de desarrollo capitalista de nuestra sociedad.

Son los rasgos esenciales del desarrollo capitalista los que generaron necesariamente una concentración creciente en la propiedad privada de los medios de producción; el carácter monopolístico y regionalmente concentrado de la economía; una desigualdad creciente en la distribución del ingreso; la deformación de la estructura productiva en beneficio de las clases explotadoras, y por lo tanto, la limitación del desarrollo de las fuerzas productivas.

En nuestro caso particular, desarrollo capitalista que en razón de las propias condiciones históricas acentuó sus consecuencias negativas al producirse como un desarrollo capitalista dependiente; inscripto en el sistema global del capitalismo internacional; subordinado a condiciones objetivas impuestas por los países dominantes en el sistema; sometido a un proceso permanente de transferencia de excedentes al exterior; librado a la extranjerización creciente incluso de sectores estratégicos que en las concepciones del desarrollo debían haber permitido la autosustentación dinámica de nuestra economía, y conformando internamente, en general, según la condición de dependencia.

Desarrollo capitalista, por último, que alcanzó muy tempranamente la fase del capitalismo de Estado, en la que el Estado opera bajo control de la burguesía como coadyuvante de las tendencias generales de desarrollo, actuando en sí mismo como capitalista para articular la dominación de las clases explotadoras y facilitar la acumulación y reproducción del capital privado.

A partir de este análisis de la realidad nacional, en el Programa Básico se definió como objetivo fundamental la toma del poder político para establecer un Estado Popular, destruir el régimen de desarrollo capitalista dependiente e iniciar la construcción de una economía y una sociedad socialista. Véanse por ejemplo a este respecto, las siguientes citas:

“Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente”.

“...como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente...”

“...se ha demostrado... que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.”

El desarrollo del capitalismo monopolista niega la ampliación de la democracia y exacerba la violencia antipopular.

El aumento del nivel de lucha del pueblo a medida que fracasa el reformismo, endurece la posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes, que en último término no tienen otro recurso que la fuerza”.

“En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las

compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece casi intacto”.

“La única alternativa verdaderamente popular, y por lo tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile”.

“Para estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la conquista del poder, constituiremos por todas partes los comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela...”

“... este nuevo poder que Chile necesita debe empezar a gestarse desde ya...”

“Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente”.

“En materia de estructura política el Gobierno Popular tiene la doble tarea de:

- preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores y
- transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder”.

“Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal.

Se creará una organización única del Estado, estructurada a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder”.

“Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista

nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo".⁽¹⁾

El Programa planteado por la izquierda en 1970, y aprobado por el pueblo de Chile es, por lo tanto, de un claro contenido revolucionario contrapuesto a todo intento de reformismo desarrollista. El Programa es no sólo anti-imperialista y antioligárquico, sino sobre todo anticapitalista, y por ende, de transición al socialismo. No propone realizar un conjunto de reformas estructurales para variar los términos de funcionamiento de la economía respetando tales términos, sino transformar cualitativamente la naturaleza de la economía y de la sociedad. No propone resolver la situación al interior de los límites del sistema, sino sustituir el sistema.

En consecuencia, el problema fundamental que plantea el Programa Básico no es un problema de carácter técnico-económico, sino el problema político de la transformación revolucionaria. Esta es la razón por la cual la política económica del Gobierno Popular es de naturaleza esencialmente política.

Por cierto, toda política económica es de naturaleza política, en cuanto orienta la resolución de problemas determinados explícita o implícitamente por contradicciones sociales y expresa necesariamente los intereses de clase representados por el Gobierno que la practica. En este sentido, la única diferencia estriba en que el Gobierno Popular reconoce y desarrolla el carácter de clase de su política económica, mientras que los Gobiernos burgueses pretenden negarlos atribuyendo a su política económica un contenido meramente "técnico", situado por encima de las

⁽¹⁾ Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular; aprobado por los partidos de la Unidad Popular en Diciembre de 1969; existen diversas ediciones.

diferencias de clase, sin otro objeto que "el interés nacional".⁽²⁾

Lo que por lo tanto se quiere subrayar cuando se dice que la política económica del Gobierno Popular es de naturaleza esencialmente política, es que ésta no sólo busca resolver los problemas que plantea el funcionamiento de la economía en consonancia con los intereses sociales inmediatos de los trabajadores, sino que se propone responder a sus intereses estratégicos de clase sirviendo a la transformación cualitativa de la estructura económica y la formación social en su conjunto, o dicho de otra manera a la revolución socialista.

Ahora bien, como Lenin señaló muchas veces, el problema decisivo en toda revolución es el problema del poder, el problema de invertir las relaciones de poder, de asegurar para las clases explotadas la capacidad de realizar sus intereses sociales de clase, de destruir el

⁽²⁾ "...entienden que su devoción a la empresa capitalista nada tiene que ver con una parcialidad de clase. Por el contrario son los más fervientes y elocuentes expositores de la concepción de que el Estado y ellos mismos están por encima de las batallas de la sociedad civil, que no pertenecen a ninguna clase, que se interesan, sobre todo, en servir a la nación entera, a los intereses nacionales, que tienen encomendada la tarea particular de someter los intereses especiales y exigencias de clase al bien supremo de todos.

"En sus pensamientos y palabras, vive de nuevo la altísima concepción que Hegel tenía del Estado, como encarnación y protector de toda la sociedad, de su razón superior y sus intereses permanentes, sobre todo cuando están en el poder en vez de sus rivales. "Pertenezco a todo el mundo y no pertenezco a nadie", dijo el General de Gaulle poco después de llegar al poder en 1958... A otros dirigentes políticos no les será tan fácil presentarse a sí mismos con términos tan grandiosos; pero hacen lo que pueden..."

Ralph Miliband: *El Estado en la Sociedad Capitalista*: Siglo XXI, México, 1970; pág. 72.

sistema de explotación a que están sometidas y permitir de este modo el desarrollo de la sociedad, de destruir el viejo Estado y reemplazarlo por uno nuevo de otro carácter. La transformación revolucionaria constituye, por lo tanto, una cuestión que es decidida por la lucha entre fuerzas sociales opuestas, por la correlación de fuerzas entre clases sociales antagonicas, y que en tanto no se resuelva acentúa todavía más la naturaleza política de la política económica del Gobierno Popular, asignándole la condición de instrumento subordinado a la lucha por el poder, a los esfuerzos para ampliar y consolidar las posiciones de poder de los trabajadores.

2. Clases, coyuntura política y política económica.

El Programa del Gobierno Popular expresa objetivamente los intereses de clase del proletariado urbano y rural, las capas medias asalariadas y la burguesía pequeña y mediana. La combinación de partidos que propuso y respalda el Programa corresponde a la alianza de estas clases y a la presencia política de fuerzas auxiliares, como los sectores sociales marginados de la estructura productiva, el movimiento de pobladores, la juventud, los estudiantes, los intelectuales y, en general, los hombres y mujeres de posiciones progresistas.

El carácter político de esta alianza difiere radicalmente del que tuvo el Frente Popular. Desde luego, a nivel de la coyuntura internacional, su propósito general se inscribe en el contexto mundial de la lucha de las fuerzas socialistas contra el imperialismo y no en el de la guerra democrática contra el fascismo. Por otra parte, su objetivo nacional no son las tareas democrático-burguesas ni el reformismo desarrollista, sino la construcción del socialismo, y este solo hecho deja de manifiesto el papel dirigente que desempeña el proletariado en el marco de una coalición en que formalmente no existen preeminencias de partidos. No

es por azar que la Unidad Popular ha destacado en la Presidencia de la República a un militante de un partido proletario.

Su presencia en el Gobierno es el resultado de un largo proceso de maduración política del pueblo de Chile; de la unidad de las clases trabajadoras del país; del desarrollo creciente de sus luchas; del grado de complejidad que éstas introdujeron en la realidad social, forzando experiencias reformistas que provocaron entre las fuerzas dominantes y opuestas a la transformación del sistema la incapacidad de conciliar sus intereses.

Sin embargo, es necesario no engañarse.

Como se ha señalado reiteradamente, la victoria de setiembre permitió alcanzar el Gobierno y dar en esta forma un importante paso, reafirmado en abril, para conquistar el poder; pero para que la victoria sea definitiva es necesario todavía movilizar *efectivamente* a la totalidad de las fuerzas sociales progresistas en torno a la defensa de sus intereses expresados por el Gobierno y su Programa, y hacerlo de un modo orgánico cualitativamente diferente.

De esta manera, la coyuntura política, desde el inicio del Gobierno Popular y todavía hasta ahora, se caracteriza por una doble situación.

Por una parte, una correlación de fuerzas sociales que tiende a hacerse más favorable a los intereses de los trabajadores, debida inicialmente a la división de la burguesía entre sus alternativas conservadora y reformista, luego a la capacidad política de maniobra mostrada por el movimiento popular, y en seguida a la ampliación progresiva del respaldo a la Unidad Popular y el Gobierno, correlación que, sin embargo, no se ha hecho decisiva, que no es suficientemente orgánica, efectiva y estable, y que expresa sólo parcialmente el *potencial de apoyo* que objetivamente debiera respaldar a la Unidad Popular y su Gobierno.

Por otra parte, lucha por la conquista del poder en condiciones de ejercicio del Gobierno en el contexto de una superestructura jurídico-política de carácter burgués, situación que otorga su especificidad (discutida más adelante) a la experiencia chilena de transición al socialismo, y que obviamente hace depender los objetivos políticos finales del éxito en las realizaciones del Gobierno como requisito necesario, aunque no suficiente.

Sin tener presente estas consideraciones, no es posible entender la política económica del Gobierno Popular, determinada *políticamente* por consideraciones de orden programático y de orden estratégico; por la voluntad de realizar el programa económico del Gobierno y por la necesidad de afianzar en el plano económico las condiciones políticas propicias para el desarrollo del Programa en su conjunto.

3. El objetivo programático de la transición al socialismo.

El objetivo fundamental de la política económica es el objetivo programático de la transición al socialismo.

Su propio enunciado deja de manifiesto una realidad evidente; se trata de dirigir un proceso histórico de transformación, de entender y conducir el desarrollo de la historia, y no de reemplazar el capitalismo por el socialismo de la noche a la mañana mediante un dictado imposible.

Si se habla de transición es porque se trata de un proceso a través del cual lo que se quiere es transformar una estructura histórica capitalista en una estructura histórica en la que predominen las relaciones socialistas de producción, vale decir, en la que durante todo el transcurso del proceso de transición y hasta que se alcance la instauración definitiva del socialismo, subsisten en la economía elementos capitalistas e incluso elementos precapitalistas como elementos subordinados. Como escribió Lenin en octubre de 1919:

“Teóricamente, no cabe duda que entre el capitalismo y el comunismo existe cierto período de transición. Este período no puede dejar de reunir los rasgos o las propiedades de ambas formaciones de la economía social, no puede dejar de ser un período de lucha entre el capitalismo agonizante y el comunismo naciente; o en otras palabras, entre el capitalismo vencido, pero no aniquilado, y el comunismo ya nacido, pero muy débil aún.

“La necesidad de toda una época histórica, que se distingue por estos rasgos del período de transición, debe ser clara por sí misma, no sólo para un marxista sino para toda persona instruida que conozca de una u otra manera la teoría del desarrollo.”⁽³⁾

La política económica del Gobierno Popular se funda en esta concepción de la transición, tiende a constituir las áreas de propiedad social, mixta y privada que plantea el Programa, y a regular las relaciones entre ellas.

De esta manera, en lo que respecta a la estructura económica, se requiere cumplir dos tareas complementarias entre sí para realizar el programa económico del Gobierno y contribuir a la lucha por el poder de que depende en último término la transición al socialismo.

⟨ Por una parte, destruir las bases de sustentación de las clases dominantes y los intereses imperialistas, suprimiendo en esta etapa la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales; nacionalizando las riquezas básicas del país; desarrollando la reforma agraria; nacionalizando el sistema bancario y financiero; nacionalizando el comercio exterior y los centros monopólicos y estratégicos de la industria y de la distribución. ⟩

(3) V. I. Lenin: “La economía y la política en la época de la dictadura del proletariado”; en *Obras Escogidas*; Editorial Progreso. Moscú, 1961. Tomo III: pág. 306.

Por otra parte, emplear las condiciones materiales que crean la propiedad social de los medios de producción fundamentales para establecer el dominio de las clases trabajadoras sobre la economía, sustituyendo la estructura vigente, predominantemente capitalista, por el predominio de relaciones socialistas de producción. Esto requiere establecer principios de organización y dirección socialistas al interior del área de propiedad social, asegurar a ésta el carácter dominante en la economía, subordinar a ella el área de propiedad mixta y someter a sus condiciones al área de propiedad privada; en suma, reemplazar el funcionamiento de la economía según la ley de la ganancia capitalista por su funcionamiento según la planificación socialista.

4. El planteamiento estratégico de la política económica.

Es la realización de este programa económico como objetivo fundamental la que exige, por su carácter revolucionario, por su carácter de expresión de la lucha de clases, un planteamiento estratégico que contemple adecuadamente las condiciones generales de desarrollo del proceso.

Exige un desarrollo estratégico que contemple adecuadamente las condiciones económicas, políticas e ideológicas de la coyuntura, la forma de generación del Gobierno, el carácter de la coalición que lo respalda, la estructura jurídico-política en que se desenvuelve su acción, la correlación de fuerzas existente, la necesidad de educar a las masas y hacerlas ganar confianza en sí mismas en el transcurso del propio proceso, la necesidad de ampliar la sustentación popular del Gobierno y desarrollar el poder del proletariado para asegurar el logro de los propósitos fundamentales.

En este sentido, incluso objetivos particulares que tienen un valor programático en sí mismos, como la redistri-

bución del ingreso, por ejemplo, adquieren un significado táctico decisivo, y por el contrario, el conjunto de la política económica de corto plazo, orientada a asegurar la actividad de la economía, deja de ser un objetivo en sí mismo para constituirse en una condición necesaria para facilitar el desarrollo del Programa, en una preocupación por sostener la actividad de la economía en los niveles necesarios para permitir el desarrollo del Programa dadas las condiciones políticas de la coyuntura.

Dicho de otra manera, para impulsar la transición al socialismo hay que tener presente en todo momento que la cuestión central es la del poder político, la conducción política del proceso, que determina el ritmo de la transformación económica y que al mismo tiempo se sirve de ella para alcanzar el objetivo fundamental de la conquista del poder.

Es posiblemente en esta última característica donde radica en esencia la especificidad del proceso de transición al socialismo en Chile.

Como es sabido, el tránsito de una formación social a otra en que predominan modos de producción basados en la propiedad privada de los medios de producción, que supone el paso de una forma de explotación a otra, por ejemplo del feudalismo al capitalismo, se apoya en el surgimiento y desarrollo de las nuevas relaciones de producción, el que precede a la transformación del sistema de dominación política e ideológica.

Por el contrario, en el caso de la transición a una formación social socialista, el establecimiento y predominio de las nuevas relaciones de producción sólo puede lograrse después que se ha producido el cambio del sistema de dominación, la conquista del poder político por el proletariado, la transformación del carácter de clase del Estado, y ello porque las relaciones socialistas de produc-

ción implican sustituir la anarquía del desarrollo preexistente de la producción social por la planificación de la economía global según las necesidades sociales. No existe, en sentido estricto, transición posible al socialismo en tanto el proletariado y sus aliados no hayan alcanzado el poder político, destruido y reemplazado el Estado burgués.

Ahora bien, la transformación del carácter de clase del Estado no se refiere mecánicamente al reemplazo de las fuerzas conservadoras por las fuerzas revolucionarias en los centros de poder estatal existentes. La conquista de todo el poder no equivale a la simple ocupación sucesiva de los diversos centros de poder estatal manteniéndose incólume el antiguo aparato del Estado para ser puesto al servicio de los intereses revolucionarios. En este sentido puede conducir a equívocos la tesis de la dualidad de poderes al interior del aparato estatal existente, a que, por comparación con la experiencia revolucionaria soviética, ha dado lugar la instalación del Gobierno Popular en nuestro país. ⁽⁴⁾

El Estado se concibe como el conjunto de instituciones y normas que bajo el dominio de una clase social y mediante "el monopolio del uso legítimo de la fuerza" asegura la cohesión social en correspondencia con los requerimientos y funcionamiento y reproducción de la estructura económica vigente y, por ende, con los intereses de la clase dominante. En consecuencia, la dualidad de poderes no puede existir sino como oposición entre el poder estatal y un poder real diferente, alternativo y antagónico, cuya gestación puede apoyarse decisivamente en el control de parte del aparato del Estado, pero que no puede desarrollarse en esencia como inundación de los restantes centros de

(4) Véase de Sergio Ramos "Chile: ¿una economía de transición?", mimeo, CESO, Santiago, 1971, págs. 32 y 33. Ver nota al principio de este artículo.

poder estatales. No debe tampoco confundirse la pugna entre los llamados *Poderes del Estado* (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) con una *dualidad de poderes* (en sentido marxista) en el seno de la sociedad; la primera sólo tiene sentido revolucionario si no se reduce al ámbito de los conflictos posibles entre Poderes del Estado al interior del Estado burgués, sino que se subordina al enfrentamiento decisivo por la transformación del carácter de clase del Estado que sólo puede sostener *realmente* el desarrollo de un nuevo poder exterior al poder estatal vigente.

De esta manera, lo peculiar de la actual coyuntura política no reside en que con la instalación del Gobierno Popular se haya generado un momento histórico prerrevolucionario "que se *funde* con un momento de inicio de la creación de las bases materiales y políticas de la transición al socialismo". ⁽⁵⁾

Como se señaló antes, es claro que lo que otorga su especificidad al proceso que se desarrolla en Chile es la lucha por el poder en condiciones de ejercicio del Gobierno en el marco aceptado de una superestructura jurídico-política de carácter burgués. Es claro también que esta situación constituye un avance importantísimo para las fuerzas revolucionarias, ya que el control del Gobierno, en razón del carácter presidencialista del régimen político en Chile, permite avanzar anticipadamente en la destrucción de las relaciones capitalistas y la gestación de relaciones socialistas de producción. En consecuencia, si se desea *precisar* la especificidad de la *experiencia chilena* corresponde discutir lo que tales condiciones generales enunciadas engendran de particular.

Esta especificidad radica, a mi juicio, en que la realización de las tareas destructivas y constructivas que per-

(5) Idem, pág. 33.

mite el control del Gobierno, por una parte fuerzan a la ruptura del sistema político e ideológico de dominación y, por otra, hacen posible la ampliación de las fuerzas revolucionarias y la constitución de un poder real alternativo que permita afrontar la ruptura definitiva del sistema fortalecido objetivamente. (6)

Entre los avances en la transformación de las bases materiales y la ruptura política decisiva que venga a asegurar el carácter socialista de los primeros, no se trata, por lo tanto, de "momentos" que se *fundan*, sino de "momentos" que se *suceden en trabazón dialéctica*.

Dicho en otra forma, la peculiaridad reside en que el control del Gobierno permite avanzar hacia la conquista del poder empleando la política económica como instrumento de articulación entre la situación prerrevolucionaria en sentido estricto y la transformación revolucionaria definitiva.

5. Los riesgos de las desviaciones.

En el transcurso de la transición al socialismo están presentes, por cierto, los riesgos de desviaciones, y por lo tanto de no concluir en el socialismo sino en el afianzamiento del capitalismo o más tarde en su renovación. Existe a este respecto tanto el peligro de desviaciones de derecha como el peligro de desviaciones de izquierda.

De una manera general se puede sostener que en el plano económico el riesgo de desviaciones de derecha es el de las vacilaciones para el desarrollo consecuente del programa, el de limitar la velocidad de formación o la extensión del área de propiedad social, el de no aprovechar la propiedad social de los medios de producción estratégi-

(6) Es en este sentido que debe hacerse referencia a las importantes debilidades que pueden observarse en la lucha política e ideológica.

cos para imponer la organización y la dirección socialista de la economía y para seguir avanzando hacia fases superiores del desarrollo socialista. (7)

A su vez, se puede sostener que, de manera general, el riesgo de desviaciones de izquierda en el plano económico es el de no entender el papel que desempeña el grado de desarrollo de las fuerzas productivas en la transformación de las relaciones de producción, pretendiéndose una

(7) Las siguientes citas de Oscar Lange constituyen una prevención adecuada a este respecto:

"...la transición del capitalismo al socialismo presenta algunos problemas especiales. La mayoría de estos problemas hacen referencia a las medidas económicas indispensables a la estrategia política que se propone llevar a cabo la transformación del orden económico y social. Pero existen también algunos problemas de carácter puramente económico..."

"El Gobierno socialista debe iniciar su política de transición con la inmediata socialización de las industrias y de los bancos que tengan que correr esta suerte".

"...difícilmente puede llevarse a cabo un amplio programa de socialización de manera gradual".

"Para conseguir sus propósitos, el Gobierno socialista debe colocarse a la cabeza de un gran movimiento masivo contra el monopolio y las restricciones, contra el imperialismo y la concentración del control económico en unos pocos, contra la inestabilidad e inseguridad social y económica. Sólo bajo el impulso de un movimiento de grandes vuelos como éste, abarcando a la mayoría de la población, el Gobierno será capaz de llevar a término un valiente programa de socialización. En ausencia de este movimiento masivo poco podrá conseguir el Gobierno socialista que detente el poder. Porque, como hemos visto, si no puede conseguirse la socialización mediante un golpe fuerte y atrevido el Gobierno no tendrá que abandonar para siempre sus objetivos socialistas..."

"...solamente existe una política económica recomendable a un Gobierno socialista como la más adecuada para alcanzar el éxito. Se trata de una política de *arrojo revolucionario*". (Subrayado en el original.)

Oscar Lange y M. Taylor: "Sobre la teoría económica del socialismo", Ed. Ariel, Barcelona, 1970. Págs. 128 a 136.

socialización generalizada; el de no comprender suficientemente las posibilidades reales de afianzar objetivamente el desarrollo del proceso; el de tratar de avanzar de manera idealista actuando no como vanguardia de las masas, sino anticipándose a ellas, separándose de ellas; el de no ser capaces de efectuar en cada momento el *análisis concreto de la situación concreta*.

En síntesis, la política económica sólo será una política revolucionaria en la medida que conduzca estratégicamente al desarrollo del Programa considerando de manera correcta la potencialidad y las limitaciones de cada coyuntura, evaluando adecuadamente la correlación de fuerzas existente para actuar contribuyendo no a debilitar el poder popular emergente sino a desarrollarlo y consolidarlo.

6. Elementos y carácter de la política económica.

Es por esta razón que en la política económica del Gobierno Popular se combinan elementos que determinadas concepciones superficiales consideran antagónicos; por una parte, la realización misma del Programa, principalmente la formación del área de propiedad social; por otra, la política redistributiva y los esfuerzos consiguientes para levantar los niveles de producción con que respaldarla y reactivar la economía en su conjunto.

A veces se juzga las acciones prácticas necesarias para el desarrollo de ambos elementos, señalando que en la política económica existe un sentido revolucionario contrapuesto a un sentido de reformismo populista, y que el conjunto de la política económica vacila entre ambos sentidos.

No se entiende de esta manera la verdadera naturaleza de la política económica. Ambos elementos están presentes, pero no tienen un carácter antagónico, ni pueden aislarse el uno del otro para asociarlos directamente cada uno de ellos por separado, a un sentido revolucionario o a un sentido reformista. Entre el desarrollo del área de propie-

dad social el carácter socialista de la economía, por una parte, y la conducción de la economía para asegurar la producción y su redistribución, por otra, existe por el contrario una relación de integración dialéctica. Ambos elementos se refuerzan mutuamente, se redefinen el uno al otro a niveles superiores, e impulsan por esta interacción el desarrollo general del proceso.

Por ejemplo, en la medida que se opera la redistribución del ingreso y la expansión de la demanda, se plantean exigencias al aparato productivo que hacen imperiosa la propiedad social de los medios estratégicos para levantar la producción a niveles socialistas de gran escala y para generar la acumulación necesaria con que sostenerla crecientemente. A su vez, la ampliación del área de propiedad social ofrece un conjunto de nuevos instrumentos, por ejemplo, para encarar los problemas de la redistribución de manera cualitativamente diferente, recurriendo en medida mucho menor a los procedimientos monetarios y facilitando mecanismos de redistribución directa que se pueden orientar con mayor precisión en beneficio de las clases trabajadoras.

No se trata por lo tanto de que en la política económica estén presentes elementos en sí mismos revolucionarios o reformistas. Es el conjunto de la política económica, el todo consustanciado de estos elementos, el que puede tener un sentido revolucionario o un sentido reformista según responda al desarrollo de las contradicciones sociales de clase fortificando o debilitando la lucha por el poder y la implantación del socialismo.

Es desde esta perspectiva que se deben juzgar los avances y los resultados de la política económica, así como la persistencia y generación de problemas en la economía.

II. LA POLÍTICA ECONOMICA Y EL CARACTER GENERAL DEL PROCESO.

No cabe ninguna duda de que en el plano estrictamente económico están planteadas todavía por mucho tiempo dificultades importantes que vencer y que el mismo desarrollo del proceso trae aparejado la necesidad de afrontar nuevos problemas; pero son la propia reestructuración de la economía y la movilización política de las fuerzas sociales revolucionarias las que crean las condiciones que permiten resolverlos. Por esta razón, el sentido y la forma en que se conduce la política económica, contribuyen de manera decisiva a determinar *el carácter general del proceso*.

1. La batalla por la producción.

La propia batalla por la producción constituye un paradigma de todo ello. Para responder efectivamente al aumento en el poder de compra de los trabajadores y la expansión general de la demanda, sin que se produzca inflación ni escasez, es necesario elevar de manera importante los volúmenes de producción; y son los mismos trabajadores los únicos que, desde el punto de vista de una perspectiva revolucionaria, pueden imponer el aumento de la producción, como de hecho lo están haciendo.

La batalla por la producción es una batalla política en diversos sentidos.

En primer lugar, porque ganarla corresponde al interés general de las fuerzas revolucionarias de impedir que se produzcan situaciones de desabastecimiento y crisis que los reaccionarios pretenden aprovechar para crear el caos y tratar de recuperar el gobierno. Se trata, por el contrario, de cubrir con producción mayor y diferente la atención de las necesidades del pueblo, y contribuir de esta manera a la ampliación del respaldo popular al Gobierno.

En segundo lugar, porque la batalla por la producción se libra en toda la economía, pero de manera diferente según las situaciones de propiedad distintas que existen en las diversas áreas. En las empresas de propiedad social y en las empresas de propiedad mixta, en las que la rentabilidad del capital privado está limitada y convenida, los trabajadores son directamente responsables de la gestión y los resultados; allí actúan los Comités de Producción. En las empresas de propiedad privada, en cambio, se trata de que los trabajadores impulsen la producción organizándose en *Comités de Vigilancia* de la Producción, exigiendo que se mantengan los stocks necesarios de repuestos y materias primas, que no se descuide la manutención de las maquinarias, que se prefiera la producción de bienes de consumo popular, incorporando a sus pliegos de peticiones la exigencia de que se utilice plenamente la capacidad instalada y se contraten los nuevos trabajadores que sea necesario.

Carece en consecuencia de sentido oponer la *batalla* de la producción a la *guerra* contra la explotación. Por el contrario, tal vez si su principal sentido político esté dado por la medida en que permita madurar, "... una clase obrera con plena conciencia de su capacidad creadora, que no soportará nunca más sobre sí el capitalismo, que luchará con la mayor decisión en cualquier eventualidad", contribuyendo así a fortalecer "el poder estatal de nuevo tipo naciente" que dé término definitivo a la explotación.⁽⁸⁾

2. La indemnización por las expropiaciones.

Junto a los problemas de orden económico que se abordan en la perspectiva de la lucha de clases que representa el desarrollo del proceso, se plantean problemas de

⁽⁸⁾ Jorge Inzunza: "La cuestión del poder: tarea de masas": en *Principios*, N° 140, ag. - setiembre, 1971, Santiago. Pág. 34.

orden político relativos a la forma en que la política económica afecta su carácter general.

Es el caso, por ejemplo, de las adquisiciones de empresas y la indemnización por las expropiaciones.

Como se señaló anteriormente, es sabido que el área de propiedad social se ha ido integrando sobre la base de acordar indemnizaciones por la expropiación de algunas empresas en consonancia con la ley vigente, y de negociar directamente la adquisición de otras, generalmente con posterioridad a su intervención o requisición, también de acuerdo con la legislación positiva.

Pues bien, frente a este hecho se plantean dos tipos de crítica.

Por una parte, los sectores reaccionarios proclaman que se está causando un perjuicio al crecimiento de la economía, que es un error destinar recursos del Estado al control de activos ya existentes en vez de aprovecharlos para realizar nuevas inversiones.

Se trata obviamente de una crítica interesada. Lo que los reaccionarios defienden no es la necesidad de aumentar las inversiones, porque son ellos los responsables de haber mantenido una tasa histórica de inversión tan baja que impidió todo crecimiento significativo de nuestra economía. Lo que los reaccionarios defienden en verdad es su interés de seguir controlando los medios de producción para mantener la explotación sobre los trabajadores.

Pero se trata también de una crítica falaz, porque dadas las condiciones en que se realiza la adquisición o se acuerdan las indemnizaciones, lo que en esencia se intercambia son los activos productivos existentes por la anotación contable de compromisos financieros a futuro, los que se servirán con una parte de los excedentes que aquellos mismos activos generen, inferior a la que se derrochaba, o se enviaba al exterior, o se ocultaba.

Existen, por otra parte, las críticas que consideran las indemnizaciones como una conciliación con la burguesía opuesta a toda política revolucionaria, y hasta se hacen chistes al respecto, diciendo que no hay en realidad un proceso de transición al socialismo sino un proceso de transacción al socialismo.

Desde luego, quienes sostienen este tipo de crítica no plantean una solución alternativa, porque para hacerlo resulta necesario desconocer las condiciones concretas de la coyuntura concreta, negar las condiciones en que se da en Chile la lucha por el poder, confundir la realidad con los deseos, arriesgar la suerte del proceso revolucionario a una confrontación precipitada por el todo o nada.

Por el contrario, la política económica del Gobierno Popular busca desarrollarse con la amplitud táctica necesaria y no considera que el problema de las indemnizaciones sea un problema de principios. La justeza de este planteamiento queda de manifiesto si se examinan los propios textos de los clásicos del marxismo, de entre los cuales vale la pena recordar la siguiente cita de Engels, que no es de ninguna manera una cita arbitraria:

“Tan pronto como nuestro Partido tome posesión del Poder del Estado, procederá a expropiar sin rodeos a los grandes terratenientes, exactamente lo mismo que a los fabricantes industriales. El que esta expropiación se lleve a cabo con indemnización o sin ella, no dependerá en gran parte de nosotros, sino de las circunstancias en que subamos al poder, y sobre todo de la actitud que adopten los grandes señores terratenientes. La indemnización no es considerada por nosotros, ni mucho menos, como inadmisibles en todas las circunstancias; Marx apuntó ante mí — ¡muchas veces! — su opinión de que lo más barato para nosotros sería el poder deshacernos por dinero de toda esa cuadrilla”. (9)

(9) Federico Engels: “El problema campesino en Francia y en Alemania”: en Marx y Engels: *Obras Escogidas*; Ediciones en lenguas extranjeras, Moscú, 1955. Tomo II, pág. 466.

Este mismo planteamiento fue recogido por Lenin en trabajos posteriores a 1919, cuando se había afianzado el poder político del Partido Bolchevique; y por cierto que no se trata de pretender una identificación mecánica entre las condiciones históricas de la revolución soviética con la situación actual en Chile, sino de subrayar que el problema de las indemnizaciones no es un problema de principios: es un problema táctico subordinado a la cuestión central de la conquista del poder.

3. *El papel de los técnicos: participación y tecnocracia.*

El de las indemnizaciones no es el único problema político que se plantea a la conducción económica.

Está, por ejemplo, el problema de los técnicos, el problema del papel que deben jugar los especialistas en las nuevas circunstancias creadas en las empresas productivas que se integran al área de propiedad social.

Para mantener y elevar los niveles de productividad y de producción, es necesario utilizar toda la capacidad de los técnicos y los especialistas. Existe una tendencia natural y en muchos casos justificada a identificar los técnicos como defensores de los intereses capitalistas. Los técnicos son trabajadores que en el régimen capitalista son también explotados, y que la mayor parte de las veces ven limitadas sus posibilidades de desarrollo profesional, pero la burguesía tiene la inteligencia suficiente para ofrecerles condiciones sociales privilegiadas, para confundirlos con su ideología, para ganarlos políticamente. Esta situación requiere que los trabajadores hagan, como está ocurriendo en la práctica, un gran esfuerzo de comprensión y no actúen de manera ciega contra los técnicos, sino que por el contrario los ganen para una colaboración amistosa, aprovechen sus conocimientos, les muestren en los hechos que la solidaridad con la clase obrera y el desarrollo del socia-

lismo les abren enormes horizontes a la ciencia y a la técnica, y a sus propios intereses profesionales.

Trabajar con los técnicos que por muchos años han servido objetivamente los intereses de los capitalistas y han sido presa de la ideología burguesa, plantea por cierto dificultades que muchas veces se sufren en las empresas, y que están representadas por el riesgo general de incurrir en desviaciones tecnocráticas. Pero por impedir la tecnocracia los trabajadores no pueden caer en la tecnofobia.

Los riesgos de la tecnocracia no se eliminan atacando a los técnicos, sino estableciendo en las empresas y en la conducción general de la economía la participación y el control directo por parte de los trabajadores y las masas populares organizadas.

En la administración de las empresas de las áreas social y mixta no se trata de sustituir un patrón por otro, ni a los gerentes por burócratas; se trata de transformar su gestión, entregando su control de manera efectiva a los trabajadores. Es con este objeto que los propios organismos de los trabajadores, de acuerdo con el Acta suscrita entre la CUT y el Gobierno Popular, han elaborado un conjunto de normas básicas destinadas a concretar aceleradamente la participación en las empresas de las áreas social y mixta, normas que consultan la vigencia de los Comités de Producción y de Consejos de Administración constituidos con representación paritaria de los trabajadores.⁽¹⁰⁾ Para impulsar el establecimiento de tales normas se creó además, en el Ministerio de Economía, el Comité Ejecutivo CUT-Gobierno de Participación.

Se trata, de esta manera, de construir y profundizar el dominio de los propios trabajadores sobre los medios

⁽¹⁰⁾ CUT-Gobierno: *Normas Básicas de Participación de los Trabajadores en la Dirección de las Empresas de las Áreas Social y Mixta*. Publicación de ODEPLAN, Santiago, 1971.

y el proceso de producción en los centros productivos estratégicos, y de impulsar la gestación del poder real antagónico al poder estatal vigente que servirá de base a la transformación de su carácter de clase.

4. Propiedad social, participación y gestión socialista.

El control de una empresa del área social o mixta por parte de sus trabajadores no modifica, por cierto, la naturaleza social o mayoritariamente social de la propiedad, la que corresponde a *todos* los trabajadores.

Dicho de otra manera, los trabajadores no se hacen cargo de una empresa socializada para actuar en su exclusivo beneficio, como si se tratara de transformar la Sociedad Anónima de unos cuantos capitalistas en la Sociedad Anónima de esos trabajadores, sino para representar en ellos los intereses de la sociedad, de todos los trabajadores en conjunto.

Esta realidad configura objetivamente situaciones que sólo la propia conciencia política de los trabajadores puede resolver, como está ocurriendo en la práctica pese a todas las maniobras interesadas en crear dificultades a que echan mano la reacción y el reformismo (sociedades "mixtas" de capitalistas y obreros, "empresas de trabajadores", etc.).

Entre estas situaciones se cuenta la creada principalmente en relación a las propias remuneraciones de la empresa, respecto a las cuales los trabajadores pasan a desempeñar un papel decisivo directo. ⁽¹¹⁾ El problema de las remuneraciones, sobre el que pesa particularmente la tra-

⁽¹¹⁾ Para una discusión teórica fundamental de este problema véase: Eugen Preobrazhenski: *La Nueva Economía*; Ed. Ariel, Barcelona, 1970; particularmente su sección sobre "La plusvalía, el plusproducto y el salario", págs. 247 a 264.

dición de luchas reivindicativas de los trabajadores, sólo podrá resolverse adecuadamente considerando sus aspiraciones legítimas sin afectar las exigencias de formación de excedentes y acumulación, lo que requiere a su vez comprensión por parte de los propios trabajadores que sólo puede lograrse en base a su dominio del manejo general de la empresa y la economía en su conjunto.

Ocurre del mismo modo en lo que respecta a la productividad, la disciplina y la nueva moral en el trabajo. Como se ha señalado, los resultados alcanzados hasta ahora en esta materia son enormemente satisfactorios (jornadas de trabajo voluntario, aumentos considerables de producción, etc.), pero se hará necesario, sin duda, prestarles una atención redoblada en el futuro, manteniendo la preocupación política y estableciendo incentivos socialistas de manera sistemática.

En lo fundamental, ninguna de tales situaciones puede encararse sino combinando el control por parte de los trabajadores en las empresas con su *dominio de la producción social en su conjunto*.

"Para hacer efectivo este poder, los trabajadores están integrados, a través de los representantes de la Central Única de Trabajadores y de las federaciones y confederaciones, en los organismos superiores de planificación del desarrollo nacional, regional y sectorial, como lo son el Consejo Nacional de Desarrollo, los Consejos Regionales de Desarrollo, ODEPLAN, Comités Sectoriales de Desarrollo, Ministerios y otros. Allí los trabajadores hacen valer sus intereses generales de todos los trabajadores del país, participando en forma real y efectiva en la planificación del desarrollo, que posteriormente se aplicará a las empresas en forma de planes y programas de producción". ⁽¹²⁾

⁽¹²⁾ CUT-Gobierno: *Idem*, pág. 6.

No puede, sin embargo, dejar de señalarse que *objetivamente* no puede establecerse tal dominio en tanto no se disponga del control total de los medios de producción estratégicos, que es imprescindible a una planificación socialista.

Hay, pues, entretanto, que ir abriendo paso de manera concreta a formas incipientes, particularmente en aquellas ramas de la producción en que la propiedad social se ha hecho dominante.

Esto significa que la producción debe programarse teniendo en cuenta no el interés de alcanzar las mayores utilidades en cada empresa aisladamente, sino el interés de satisfacer las necesidades sociales, que son principalmente las necesidades populares, las necesidades de todos los trabajadores. Significa también que no puede disponerse por separado de los excedentes de cada empresa, que las reivindicaciones económicas de los trabajadores no puedan encararse como en las empresas capitalistas, que las utilidades de cada empresa socializada deben canalizarse a un fondo común de excedentes de todas las empresas, para ser designadas por el Estado con criterio socialista según la planificación general de la economía y no con criterio particular de ganancias capitalistas.

5. Tareas económicas y movilización política.

En consecuencia, la participación de los trabajadores no puede reducirse a su control de las empresas de las áreas social y mixta, y debe ser activa en la dirección general de la economía, en todo el proceso de planificación. Pero todavía más, esa misma participación debe estar presente con carácter cada vez más avanzado en *cada uno* de los aspectos de la política económica y trascender a la vida social en su conjunto.

Tal es, por ejemplo, el caso de las políticas de precios y abastecimientos. Creados los desajustes transitorios y las

dificultades contingentes de abastecimiento por la expansión de la demanda y por factores imprevisibles de magnitud inusitada (terremotos y otras calamidades naturales), la oposición política ha procurado hacer de este problema el centro de sus fuegos contra el Gobierno.

Existen, desde luego, factores objetivos que resolver para dar solución al desabastecimiento. Seguirá siendo necesario para ello aplicarse a la activación de la oferta, ampliando todavía más la utilización de las capacidades instaladas (aumento de producción en el área social, convenios de producción en el área privada y contingentes de producción en el caso de los monopolios que aún permanecen en ella), acelerando la integración al área social de los monopolios incapaces de desenvolverse en las nuevas condiciones económicas, y desarrollando un programa apropiado de inversiones complementarias de maduración a corto plazo.

Lo que sin embargo se quiere destacar aquí es la medida en que la oposición política es superada cuando se la encara en base a la movilización política del pueblo, disponiéndose su organización para multiplicar la eficacia de los instrumentos burocráticos de Gobierno.⁽¹³⁾

Con este propósito, se han creado en las poblaciones las Juntas de Abastecimiento y Precios, integradas por funcionarios de Gobierno, por representantes de los organismos locales de masas (Centros de Madres, Juntas de Vecinos, etc.), y de los pequeños comerciantes del sector, para que asuman la vigilancia y canalicen la información sobre las dificultades en materia de abastecimientos y precios. Se ha desarrollado igualmente un programa de traslado de las

⁽¹³⁾ Véase la intervención del ministro de Economía, Pedro Vuskovic, en el Encuentro con las Dueñas de Casa, efectuado en el Estadio Chile, el 29 de julio de 1971. Publicación de la Consejería de Difusión de la Presidencia de la República, Santiago, 1971.

Pío García E.

propias oficinas de la Dirección de Industria y Comercio, organismo responsable del control sobre la materia, al terreno mismo de las poblaciones. Estas medidas, encaminadas a encargar al propio pueblo la realización de las tareas de Gobierno que afectan sus intereses inmediatos, empiezan recién a mostrar sus frutos, y si próximamente se hace necesario, deberán ampliarse, encomendándose a estos mismos mecanismos y otros que se creen, el control directo sobre los precios y funciones específicas en la distribución.

De la misma manera, los avances en la construcción del área de propiedad social que en determinadas localidades alcanzan una gran densidad (por ejemplo en Tomé y en general toda la zona de Concepción), crean bases materiales no sólo para la planificación regional de "la economía", sino para avanzar hacia el cambio de las relaciones sociales en su conjunto. En esta forma, la integración y el funcionamiento de una empresa en el área de propiedad social no debe considerarse solamente un anticipo de construcción de la economía socialista, sino un instrumento de transformación de toda la sociedad.

Es en la realización de estas actividades que plantean la política económica y las restantes políticas gubernamentales, que se encuentran fundamentalmente en la coyuntura, las tareas concretas en torno a las cuales desarrollar la movilización popular necesaria para que se geste y se organice el poder real que permitirá transformar el carácter de clases del Estado, destruyendo el Estado burgués y reemplazándolo por un Estado Popular de todos los trabajadores, por un Estado Socialista.

6. Capitalismo de Estado y transformación socialista.

Es un hecho que al inicio del Gobierno Popular el desarrollo capitalista de Chile había alcanzado la fase del capitalismo de Estado, en la que, como se indicó antes, el

Estado burgués actúa en sí mismo como capitalista para articular la dominación de las clases explotadoras y ya no sólo garantizar, sino ahora apoyar *directamente* la acumulación y reproducción del capital privado.

La política económica del Gobierno Popular no se orienta, desde luego, a consolidar el capitalismo de Estado, sino a destruirlo. Es precisamente para conseguir tal objetivo que desde el primer momento inicia la integración al dominio del Estado de los medios de producción estratégicos. Considerar la formación y ampliación del área de propiedad social como un afianzamiento del capitalismo de Estado es un error de proporciones por diversas razones.

En primer lugar, porque la política de expropiación de empresas capitalistas para constituir las en propiedad social no selecciona según el criterio de servir el funcionamiento del capitalismo, sino según el criterio de controlar los centros de la economía necesarios para destruir el capitalismo; no se realiza por disposición y en beneficio de los intereses de la burguesía, sino en contradicción con su voluntad de intereses. Mientras en el capitalismo de Estado el desarrollo de las empresas estatales está encerrado entre los mismos límites que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, el de la dominación de las relaciones capitalistas, la política económica del Gobierno Popular avanza en la ampliación del área de propiedad social hasta el punto necesario para hacer dominantes las relaciones socialistas y permitir nuevo desarrollo a las fuerzas productivas.

En segundo lugar, porque al constituirse el área de propiedad social el control ejercido por los trabajadores a través de la participación, altera simultáneamente las relaciones técnicas de producción al interior de las empresas que se integren a ella. ⁽¹⁴⁾

(14) Sobre el concepto de relaciones técnicas de producción, véase de Marta Harnecker: *Los Conceptos Elementales del Materialismo Histórico*; 6ª edición, revisada y ampliada; Ed. Siglo XXI, México, 1971, págs. 33-37.

En tercer lugar, porque *una vez completada en lo fundamental* el área de propiedad social se crean las condiciones materiales necesarias para establecer la planificación socialista, no sólo a través de la aplicación de principios de organización y dirección socialista en su interior, sino sobre todo mediante el control de la producción social en su conjunto que supone el dominio sobre las áreas mixta y privada. ⁽¹⁵⁾

Finalmente, porque el proceso de formación del área de propiedad social y de participación de los trabajadores en las empresas que se integran a ella, constituye el expediente fundamental, aunque no exclusivo, a través del cual se gesta y organiza el poder real del proletariado que permitirá reemplazar el actual poder estatal transformando el carácter de clase del Estado.

En síntesis, si el Gobierno Popular y la dirección política de sus partidos son capaces de imponer la formación del área de propiedad social y consolidar su carácter dominante en la economía, de sustituir el criterio capitalista de la ganancia máxima por el de la planificación socialista, de asegurar el control de los trabajadores sobre la conducción de la economía, de desarrollar el poder de los trabajadores hasta reemplazar el poder estatal vigente y construir un nuevo Estado popular bajo dirección del proletariado; entonces todo el proceso que se desarrolla no conducirá a la renovación del capitalismo de Estado, sino a la construcción irreversible del socialismo.

⁽¹⁵⁾ Para algunas consideraciones diferentes sobre el segundo y tercer aspecto, véase de Lucio Geller: "Algunas preguntas sobre la construcción el socialismo en Chile"; en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, Nº 9, setiembre de 1971, Santiago; sección VI, págs. 115 a 118.

darcy ribeiro

SALVADOR ALLENDE
Y LA IZQUIERDA DESVARIADA

Este trabajo, a diferencia de las tres anteriores, fue escrito después del golpe militar que derrocó a Salvador Allende. (N. del E.)

"... Se los digo con calma, con absoluta tranquilidad: yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile: sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Que lo sepan: dejaré la Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera.

"Que lo sepan, que lo oigan, que se les grabe profundamente: defenderé esta revolución chilena y defenderé el Gobierno Popular, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo."

Salvador Allende, 4 de diciembre de 1971.

Escribo sobre un hombre bravo. Un héroe-mártir más que la historia nos brinda, cuando lo que hubiéramos querido era tenerlo con nosotros en las luchas por conquistar la condición de pueblos autónomos que existan para sí mismos y vivan según su propio proyecto.

Escribo sobre un estadista. El más lúcido con quien conviví y el más combativo, que deja como legado para nuestra reflexión la experiencia revolucionaria más temeraria, generosa y avanzada de nuestro tiempo: edificar el socialismo en democracia, pluralismo y libertad,

Escribo sobre la muerte de un amigo queridísimo que amaba la vida, pero sabía y sentía que sólo vale la pena vivirla en dignidad y si ella es dedicada a una causa socialmente generosa.

Escribo, de hecho, para meditar sobre este último y asombroso episodio de la historia latinoamericana: el asesinato de un presidente en el auge de su prestigio popular, aunque también bajo la más extremada odiosidad de los privilegiados.

Yo lo veo con sus cuarenta compañeros, armas en manos, tirando para defender, ya no al Palacio de la Moneda bombardeado y en llamas, sino la dignidad del pueblo chileno y la coherencia de su liderazgo revolucionario. Oigo su última proclama como si estuviera allí a su lado:

"Así se escribe la primera página de esta historia. Mi pueblo y América escribirán el resto."

Escribo perplejo y apasionado. ¿Cómo no emocionarse frente a los cuadros de esta tragedia? El Compañero Presidente, primero abatido por balazos en el estómago y en el pecho, después acribillado. ¿Cómo no espantarse ante el último homenaje de los compañeros que sientan a Allende muerto en la silla presidencial, le ponen la banda simbólica de su mando constitucional y lo envuelven en la bandera patria para volver, en seguida, al combate sin esperanza? ¿Cómo no reconstruir, con espanto, la marcha fúnebre emprendida en secreto, con la familia andando bajo la mira de fusiles, detrás de un féretro sellado para esconder el crimen hediondo?

Pero no escribo para lamentar. Lo hago buscando ser digno de Allende, para dar aquí mi visión de nuestros errores, los de las izquierdas, que permitieron al imperalismo esta nueva victoria sobre nosotros. Mi preocupación es clamar contra nuevos errores fatales que estrechen más aún esta Nuestra América, cada vez menos nuestra.

Por todas estas razones que nadie espere de mí un análisis frío ni contemplaciones, con quien quiera que sea. Yo, como todos los latinoamericanos que de hecho lo son, estoy impactado hasta la última fibra por la tragedia chilena; por la visión de los compañeros que fueron y siguen siendo masacrados; por la imagen del pueblo chileno acorralado y sometido a un horrible gorilaje.

UN ESTADISTA PIONERO

Conocí a Salvador Allende en 1964, cuando él nos fue a visitar, a Goulart y a sus ex ministros exiliados en el Uruguay y me acordaré siempre de las largas conversaciones que tuvimos. Recuerdo sobre todo el encantamiento que produjo en mí —entonces un provinciano brasileño que sólo después aprendería a ser latinoamericano— la lucidez y la pasión con que él analizaba y evaluaba nuestro fracaso: "es como una inmensa montaña que se hunde dejándonos un hueco enorme, insustituible". Por sus palabras percibí más claramente las dimensiones continentales y mundiales de nuestro fracaso y su terrible impacto sobre la lucha de liberación de América latina.

Lo vi después muchas veces, principalmente cuando pasé a vivir en Chile, meses antes de que él asumiera la Presidencia. Fui por casi dos años, con Joan Garcez, uno de sus colaboradores, que estudiaba con él la situación política, analizaba las alternativas de acción y le preparaba notas inspiradas en su pensamiento. Salí de Chile hace un año —llamado para las tareas que me ocupan en Perú—, pero cada una de las veces que volví para visitarlo, él me hizo sentir generosamente su aprecio. Hablábamos durante horas que eran de enseñanza para mí y de viva percepción de la lucidez de Allende estadista que, frente a una ruta pionera, abría su camino, con tino, osadía y coraje.

Mi sentimiento fue siempre —y lo es más aún ahora— el de que Allende, en el plano ideológico, era un hombre solo, sin ayuda, incomprendido. Los mismos chilenos más cercanos a él se sorprendían cada día con la grandeza del hombre que los incitaba y comandaba. No les era fácil sustituir la imagen ingenua del viejo parlamentario, demasiadas veces candidato a la presidencia, por la figura de estadista que en él reconocían ahora, sorprendidos, a veces dudosos. Más difícil todavía era para muchos aceptar el liderazgo de un estadista, dentro de un proceso político dado, cuando lo que en realidad aspiraban era a un comandante dentro de un grupo de acción directa.

Aquel hombre solo, encabezaba, diseñaba y dirigía el proceso político más generoso y complejo del mundo moderno, elevando a Chile a alturas incomparables de creatividad teórica y a osadías impensables de repensar todo lo que las izquierdas tenían como dogmas. Su tarea era nada menos que abrir una ruta nueva, evolutiva, al socialismo. Una tarea sólo comparable a la de Lenin, cuando hostigando a su viejo amigo Kautzky, reivindicaba el derecho y el deber de intentar la edificación del socialismo en la Rusia atrasada, en lugar de esperar la tantas veces anunciada revolución alemana o inglesa. Esta revolución que jamás ocurrió, pero parecía corresponder mejor a las previsiones de Marx de un socialismo maduro que superaría y trascendería un capitalismo plenamente desarrollado. La revolución concreta, viable, pensaban Lenin y Trotsky, era aquélla la de la Rusia del atraso, en la cual el socialismo sería llamado a promover el desarrollo que el capitalismo era incapaz de lograr, para crear allí las bases de expansión de la revolución mundial. Y así fue. Sin la URSS, el milenio hitlerista de la burguesía alemana en el umbral de la desesperación, habría degradado lo humano hasta el límite último de la iniquidad.

Allende, por un vuelco en la historia, tuvo que revivir el mismo destino pionero, llamado a concebir y a concretar la segunda vía al socialismo. Aquella que hubiera debido ocurrir en Francia o Italia con sus enormes, flojos y coniventes partidos de izquierda, pero se abrió en Chile del cobre cautivo.

TRAMPA DE LA HISTORIA

Para esta gigantesca tarea político-ideológica, Allende estaba solo. Para unos, los ortodoxos, la vía chilena era una especie de trampa de la historia que ponía en riesgo conquistas y seguridades duramente logradas en décadas de luchas. A pesar de esto, fueron los que mejor comprendieron el proceso en su especificidad y los que más ayudaron a realizar sus potencialidades, como a reconocer sus limitaciones. Pero esto es decir muy poco cuando, en realidad, los comunistas chilenos fueron el único apoyo sólido y seguro con que contó Allende en sus tres años de lucha.

Para otros, los desvariados, no existía ninguna vía chilena. En la ceguera de sus ojos, tapados por esquemas formalistas, y en el sectarismo de su disposición unívoca hacia un voluntarismo, tan heroico cuanto ineficaz, sólo querían convertir a Chile en Cuba, concebida como único modelo posible de acción revolucionaria. Además de visiblemente inaplicable a las circunstancias chilenas, el modelo que tenían en mente no era más que una mala lectura teórica de la experiencia cubana. Inaplicable en cualquier parte, porque sólo veían en ella la acción armada, cerrando la percepción a toda la compleja coyuntura política dentro de la cual la acción guerrillera tuvo lugar y eficacia.

Alienados por su visión paranoica, negaron de hecho su concurso al proceso que Allende comandaba y le crearon sus primeros graves problemas internos. A cierta altura, en su oportunismo por actuar a cualquier costo *profundi-*

zando el proceso, se convirtieron en provocadores. Teniendo una línea de acción más bien etnológica que política, se hicieron agitadores eficaces de los seculares reclamos de los indígenas Mapuche, conduciéndolos a invasiones antes de que la Reforma Agraria en curso atendiera a sus reivindicaciones. Más tarde, con la misma postura alucinada, pasaron a agitar a los pobladores, creando crecientes áreas de roce con la legalidad, cuya defensa era la condición misma de llevar adelante, con éxito, el proceso chileno, en una coyuntura de dualidad de poder.

Su alucinación, común a tantos grupos ultristas de todas partes, sólo es comparable a la alienación religiosa de la que hablan los clásicos. Así como ésta impide ver el mundo real —porque sólo tiene ojos para ver demonios y santos en acción sobre los hombres— el desvarío ultrista es también una alienación que imposibilita ver la realidad porque interpone, entre ella y el observador, dogmas y esquemas llamados marxistas pero que desesperarían a Marx si él tuviera que escucharlos.

Los socialistas, miembros de un partido electoralista, vivían del antiguo, renovado y creciente prestigio popular de Allende. Pero, vacíos de una ideología propia, pasaron a funcionar, por un lado, como una caja de resonancia de los desvariados, creando con su radicalismo verbal y su inflexibilidad táctica, los mayores obstáculos a la conducción política. De hecho, la mayoría de sus fracciones actuó más bien en contra de Allende —a través de denuncias descabelladas, de exigencias infantiles y de propuestas provocativas— que en contra del enemigo, jamás reconociendo y ajustándose al carácter gradualista del proceso chileno y a sus requerimientos específicos de eficacia. Por otro lado entregados a disputas estériles con los comunistas, pusieron en eso más energías que en la lucha concreta contra el enemigo común. Ultristas y socialistas parecían mancomunados para negar a Allende, por sectarismo y ceguera,

toda flexibilidad táctica que hubiera abierto los horizontes de acción política indispensables para hacer frente a la contrarrevolución y a la sedición militar. Así, sus acciones, en lugar de frenar una escalada que sólo servía al enemigo desesperado, forzaba su intensificación en las áreas y sectores más inadecuados, facilitando la actividad contrarrevolucionaria que progresaba en todos los campos y la sedición militar que Allende buscaba frustrar con apoyo de los oficiales fieles al orden constitucional.

LAS IZQUIERDAS ALIENADAS

Lo más doloroso de mi experiencia chilena fue ver la soledad de Allende. ¿Dónde estaban, entre tantos *teóricos*, los efectivamente capaces de ayudarlo a definir los requisitos específicos de explotación de la vía chilena? ¿Dónde estaban, entre tantos marxólogos y politicólogos, tan habladores, los de hecho capacitados a diagnosticar los problemas concretos y a formular soluciones asequibles? ¿Dónde, entre tantos izquierdistas facciosos, los cuadros indispensables para llevar a la práctica, en las bases, las palabras de orden de Allende?

Lo más doloroso fue ver los *mejores revolucionarios*, por su disposición generosa de entregar sus hígados a las balas en actos de voluntarismo heroico, negarse a poner el hombro al proceso concreto que diariamente Allende llevaba adelante.

Lo que vi fueron los *mejores teóricos* —porque habían leído más esa tontería exegética que se autodenomina marxismo— deambulando por Chile como si estuvieran en la Luna, incapaces de percibir y entender el proceso revolucionario que tenían delante suyo porque a sus ojos ciegos tratábase de un mero *reformismo*. Unos y otros exorcizaban más que combatían, en actos más simbólicos que concretos y se alimentaban recíprocamente con su palabrerío.

Pero de hecho se negaban a las tareas de la historia concreta que protagonizaban a su pesar, suspirando por una revolución de quimera que algún día caería sobre sus cabezas.

Es cierto que hubo muchas excepciones. Aquellos que, a partir de su experiencia libresca pero trascendiéndola se entregaron a la lucha unitaria. A ellos, a su capacidad política, se debe el vigor extraordinario que el proceso chileno llegó a alcanzar. Por un lado, en la forma de un gigantesco movimiento de masas que por largo tiempo enfrentó y paralizó las maniobras fascistas. Por otro, en la forma de luchas de clase llevadas a un nivel sin precedentes que, bajo condiciones adversas, ganaron para la Unidad Popular el apoyo de la mayoría de la población, oponiendo crudamente el pueblo a las *capas privilegiadas* e imposibilitando que las huelgas políticas paralizaran la industria.

Lo que se veía en conjunto, sin embargo, era a Allende hostigado por las izquierdas alienadas, luchando contra una derecha que, sintiéndose herida de muerte, alcanzó una lucidez desesperada por saber que no podría sobrevivir a dos años más de gobierno de la Unidad Popular y se dispuso a hacerlo todo para derrocar a Allende.

Las izquierdas desvariadas jamás evaluaron esta situación. Por eso debemos reconocer que su radicalidad no se fundaba siquiera en los esquemas inspirados en textos referentes a los momentos más intensos de la lucha revolucionaria. Ningún revolucionario consciente provocaría a la derecha buscando radicalizar un proceso político sin haber preparado previamente a los trabajadores y al pueblo para conducirlos, en una convulsión social generalizada, al enfrentamiento con la reacción, con posibilidades de victoria.

En efecto, la radicalización ultrista de la izquierda, sumada al terrorismo de derecha, confluyeron en beneficio de una contrarrevolución orquestada por un comando uni-

tario desde el punto de vista político y militar y conducida por agentes provocadores costeados y asesorados internacionalmente.

Desde el primer momento, Allende percibió con toda lucidez que eran falsos, o que no se aplicaban a la vía chilena, algunos de los célebres dogmas de las izquierdas desvariadas. Entre ellos, el de que se avanza hacia el socialismo exclusivamente por la lucha armada; de que el socialismo se construye sobre el caos económico; de que cumple derrocar previamente toda la legalidad burguesa para abrir paso al socialismo.

TRADICION DEL EJERCITO

El primero de esos dogmas se expresaba en la convicción generalizada de que entre el *statu quo* y el socialismo estaría el cadáver de las fuerzas armadas. Allende sabía que no podía enfrentarlas directamente, y las veía con más objetividad. Primero, como una burocracia tan jerarquizada que podría quizás ser sometida a los mandos institucionales. Segundo, como una institución eminentemente política, proclive al fascismo por lealtades clasistas, por su constitución y adoctrinamiento, pero susceptible de ser dividida y anulada políticamente por la acción disciplinada del pueblo organizado.

Dentro de esta concepción suponía que, bien conducido el proceso chileno, el brazo armado del viejo orden o parcelas ponderables de él podrían convertirse en custodios de un orden solidario. Esto si no se sentían amenazados en su sobrevivencia institucional ni perjudicados en sus privilegios. "Sufrían crisis histéricas en la transición", decía Allende, que concebía estas crisis como intencionadas y golpes. Confiaba, sin embargo, en que podría, probablemente, controlar esos levantamientos a condición de que algunos cuerpos de las fuerzas armadas se mantuviesen

fieles a la legalidad institucional y de que los militares incorporados a las tareas del desarrollo nacional le brindasen apoyo político. Pero, sobre todo, demostrándoles fehacientemente que en Chile no se repetiría lo de Vargas en 1954, lo de Perón en 1955, lo de Goulart en 1964; quienes, frente a la alternativa de una convulsión generalizada y de una guerra civil, prefirieron caer a luchar.

Allende actuó siempre, hasta el fin, dentro de esta perspectiva. Mantuvo el poder por tres años, obligando a las fuerzas armadas a ejercer sus funciones de garantes de la seguridad del Estado en la represión al terrorismo de derecha. Al mismo tiempo llamaba al pueblo a la defensa de las conquistas del gobierno de la Unidad Popular. Estas dos clases de directivas, dadas simultáneamente, aunque contrapuestas, pudieron, sin embargo, ser llevadas muchas veces a la práctica.

Así, por largo tiempo, Allende disuadió a los militares golpistas de la conspiración por la certeza que les infundió de que un golpe sumergiría el país en una guerra civil en que todo lo que eran y tenían sería puesto en juego. De esa forma pudo convocar generales para integrar ministerios, no porque tuviesen afinidades con la orientación política del gobierno, sino en el cumplimiento de órdenes estrictas, dictadas en nombre de la seguridad del Estado. También en esa forma pudo contar con el apoyo de muchos oficiales, una minoría es cierto, pero una minoría que tendería a crecer si otro fuera el curso del proceso.

El momento más alto quizás de esta interacción del gobierno de la Unidad Popular con los militares fue cuando Allende logró, en su viaje a la Argentina, que Lanusse, en lugar de dirigirse a Brasil fuera a Chile. Ello significó no sólo una derrota de la política de fronteras ideológicas, sino también una victoria del derecho de los latinoamericanos al pluralismo ideológico y una enorme hazaña militar. De

hecho, con esta distensión, Allende demostró a los generales que, por su acción política, garantizaba mejor el enfriamiento de las fronteras con la Argentina que con cualquier carrera armamentista y, principalmente, que un poder socialista no tenía por qué debilitar la seguridad nacional.

Sin embargo, para proseguir en este control institucional de las fuerzas armadas sería necesario llenar un requisito indispensable: el de que Allende asumiera efectivamente el comando unificado sobre las izquierdas militantes y las pusiera en acción dentro del cauce del proceso. Esto jamás lo logró. Los actos desesperados de la izquierda desvariada, junto a la inacción y la palabrería de los confusos líderes socialistas, contribuyeron para minar estas condiciones, facilitando así la tarea de una derecha entregada francamente a la contrarrevolución.

EL CHANTAJE DE LA DERECHA

En estas condiciones, los liderazgos demócrata-cristianos aliados a la extrema derecha hicieron del Parlamento un órgano de provocación, chantaje y bloqueo al Poder Ejecutivo, al mismo tiempo las altas jerarquías del Poder Judicial cuestionaban la legalidad de las acciones del gobierno. Simultáneamente sus aliados ideológicos llevaban a las capas medias a la desesperación por el temor de perder, no lo que tenían, sino sus vanas esperanzas de enriquecimiento y de prestigio que, se les decía, en un régimen socialista serían rotundamente negadas. Por otro lado, los provocadores profesionales activaban a la *lumpen-burguesía* de los cien mil micro empresarios, camioneros, feriantes, etc. y a la enorme masa que estaba bajo su control, para toda suerte de acciones subversivas y de sabotaje contra el gobierno. Aparentemente se trataba de sectores desorganizados e impotentes frente al fuerte apoyo obrero de la

UP. En realidad, incitados por sediciosos dispuestos a todo tipo de actos de terrorismo, sobornados por los acaparadores que montaron el desabastecimiento y coordinaban el mercado negro condujeron, por dos veces, al país a la parálisis. En la primera pudieron ser contenidos por las fuerzas armadas y por las organizaciones populares. En la segunda prepararon el desastre final porque la conspiración militar ya había desarticulado el aparato represivo del Estado, y las organizaciones populares, confundidas por los comandos radicales, habían perdido las condiciones de actuar.

Otra convicción de las izquierdas desvariadas, que Allende negaba, era la de que el socialismo se construye sobre el caos económico total, partiendo de un comunismo de guerra, para una posterior reorganización institucional de la sociedad en nuevas bases. También esa estrategia era inaplicable a Chile y no era necesaria. La política económica de Pedro Vuscovich, fundada más en el uso práctico de las palancas administrativas disponibles que en la conquista previa de una imposible legalidad socialista, se reveló de hecho mucho más eficaz de lo que se podía prever. Estas conquistas fueron logradas dentro del marco general de la institucionalidad previa, pero aplicándola con sentido opuesto, mediante el uso de los instrumentos legales de la dominación clasista, ahora para contener el privatismo y avanzar, paso a paso, construyendo las bases de una nueva economía colectivista.

Es cierto que, en su límite, la coalición parlamentaria centro-derechista y el Poder Judicial, jugando con la legalidad para debilitar la autoridad de Allende como comandante en jefe de las fuerzas armadas, así como la acción mancomunada de los políticos y los empresarios para provocar el colapso económico, crearon condiciones para una insurrección incontenible. Pero muchos otros factores, además de las acusaciones de *legalismo* o *reformismo*

por parte de la izquierda, se conjugaron para este efecto. Entre ellos, la indisciplina de las propias izquierdas que contribuyó, por igual, a erosionar el poder de comando del gobierno, la moral de las organizaciones populares, el poderío de los sindicatos y la acción de la oficialidad fiel al régimen constitucional.

Hay mucho que aprender de esta experiencia única de repensar con originalidad los principios de la política económica para brindar un cauce de transición al socialismo. Entre sus logros se cuenta el de acabar con el desempleo, el de elevar sustancialmente el patrón de vida de las capas más pobres; el de aumentar ponderablemente la productividad industrial; el de intensificar la reforma agraria; el de imponer el control estatal sobre la banca privada y el comercio exterior, el de socializar las empresas claves; y, sobre todo, el de recuperar para los chilenos las riquezas nacionales, empezando por el cobre, sujeto desde siempre a manos extranjeras.

Allende logró probablemente más, en tres años, por esta vía, que cualquier revolución socialista en igual período. Por eso ganó elecciones, siendo Gobierno, lo que jamás había ocurrido antes en Chile. Pero también llevó a todos los privilegiados a la desesperación, desafiándolos a promover la contrarrevolución como único modo de garantizar su propia supervivencia como clase.

Aquí conviene recordar que Allende —aunque solo también en esta tarea— hizo lo posible para disuadir a las capas medias de profesionales de entregarse a la sedición. Sin embargo, el carácter del proceso, su marcha gradual pero inflexible hacia el socialismo hizo imposible este enlistamiento. Una por una de las instituciones representativas de estas capas, los gremios de empresarios medianos, los colegios profesionales, las federaciones estudiantiles de nivel medio, los universitarios fueron entregándose a la contrarrevolución.

LA CONTRARREVOLUCION EN MARCHA

Frente a esta radicalización habría sido indispensable contar con los medios adecuados para vencer la contrarrevolución en marcha. Esto, dada la dualidad efectiva de poder, fue resultando imposible. ¿Cómo tratar con mano dura a los acaparadores y especuladores? ¿Cómo reprimir severamente al terrorismo de los grupos fascistas? ¿Cómo limpiar el medio financiero del capital aventurero que, fuera de la banca, especulaba libremente? Combatir a un tiempo todas estas fuentes se tornó políticamente impracticable desde que la DC, jugando con la inflación, el colapso económico y el golpe negaba todo al gobierno en el Parlamento y se hacía sorda a los llamamientos y denuncias de Allende sobre la marcha del golpe contra la democracia y las instituciones que ella pretendía defender. Habría sido por igual indispensable imponer un racionamiento en manos de las fuerzas armadas, lo que encontraba oposición hasta en las izquierdas radicales que jugaban con el desabastecimiento como técnica de control de las barriadas. Sería indispensable también haber enfrentado con más ayuda de la que tuvo Allende el cerco económico externo que, boicoteando las exportaciones chilenas y actuando sobre la banca internacional para presionar a Chile a pagar su astronómica deuda externa heredada de la DC, creó las mayores dificultades económicas al gobierno popular.

Nadie puede olvidar la contradicción flagrante entre la valoración imperialista del proceso chileno como de importancia trascendental y su subvaloración por las potencias socialistas. Excepto los cubanos, que hicieron lo imposible para comprender y ayudar a Allende —reduciendo incluso sus parcas raciones alimentarias para donar azúcar y otros artículos a los chilenos— el apoyo socialista

en el campo económico, que era lo único requerido, fue menos que mediocre.

Bajo estas presiones adversas y las desastrosas huelgas en la gran minería del cobre, la política económica de Allende que permitió inicialmente alcanzar enormes victorias en la lucha por desmontar las bases del orden privatista, terminó por sucumbir desbaratada por una inflación galopante. Es decir, la economía hizo lo posible por sostener la política de la Unidad Popular, pero cuando necesitó medidas políticas para seguir adelante, éstas le fueron negadas.

Allende supo siempre que luchaba sobre el filo de la navaja, que su esfuerzo por encontrar el camino adecuado para la transición evolutiva al socialismo involucraba un gran margen de riesgo que él debería aceptar. Recusar estos riesgos sería caer en componendas parlamentarias que desnaturalizarían al proceso chileno como vía hacia el socialismo o en aventurismos voluntaristas que lo habrían tumbado mucho antes. La dura verdad es que sólo llega a acertar en intentos grandiosos como el de Allende quien acepta el reto, siempre posible, de un error fatal. El resultado en Chile fue el desastre y el retroceso que hoy lamentamos. Sin embargo, pudiera haber sido otro, la victoria. La evidencia de esta posibilidad fue lo que unificó todo el centro y la derecha en la sedición.

CORAJE PARA LA AUTOCRITICA

Lo que pido es tan sólo que meditemos sobre esta lección con el debido respeto por su grandeza y con el coraje necesario para la autocrítica. Todos nosotros, la izquierda de América latina y del mundo, fuimos derrotados en Chile. Cada uno de nosotros tiene por ende su autocrítica a hacer, tanto por lo que hicimos de dañoso al proceso chileno como por lo que dejamos de hacer en su apoyo.

Lo que no puede ser puesto en duda es que Allende explotó hasta los últimos límites las posibilidades que la historia abrió a los chilenos para edificar el socialismo en democracia, pluralismo y libertad. Tuvo posibilidades de victoria respecto de las cuales la derecha chilena y el imperialismo jamás dudaron. Su lección es habernos indicado un duro y difícil camino. Un camino que exigirá, mañana, de los que lo retomen, la misma lucidez, entereza, rectitud y coraje con que Allende marchó por él hasta la muerte con el propósito de, sobre su derrota, abrir un cauce unitario al nuevo y cruento proceso chileno.

En el Che, la historia nos dio el héroe-mártir del voluntarismo revolucionario que vino a dignificar la imagen desgastada de los liderazgos burocráticos de la vieja izquierda. Con Allende, ella nos da al estadista combatiente que llega hasta la muerte luchando en su esfuerzo por abrir a los hombres una nueva puerta hacia el porvenir que puede ser y que debe ser.

El será el héroe de los que tengan, en el futuro, que luchar de hecho por el socialismo, bajo oposición parlamentaria y bajo el riesgo de un golpe militar. Ojalá donde y cuando ello ocurra, exista una izquierda por fin políticamente madura y desacralizada de dogmas pueriles, tan combativa como lúcida y, sobre todo, capacitada para ver objetivamente la situación en que actúa y para aceptar y enfrentar las tareas que la historia le imponga.

INDICE

	PÁG.
<i>Notas sobre la política económica de la Unidad Popular en Chile, de Carlos Rossi</i>	7
<i>La política económica del gobierno de la Unidad Popular o la expresión de la hegemonía pequeño-burguesa en el proceso chileno, de Ruy Mauro Marini</i>	19
I. La incentivación del consumo	21
II. Los problemas creados por la incentivación del consumo	22
III. El problema de la acumulación	27
IV. El carácter de clase de la política económica	30
<i>La política económica del Gobierno Popular, de Pío García E.</i> ..	33
Advertencia	35
I. Los fundamentos políticos de la política económica del gobierno popular	37
II. La política económica y el carácter general del proceso	54
<i>Salvador Allende y la izquierda desvariada, de Darcy Ribeiro</i> ..	67
Un estadista pionero	71
Trampa de la historia	73
Las izquierdas alienadas	75
Tradición del ejército	77
El chantaje de la derecha	79
La contrarrevolución en marcha	82
Coraje para la autocrítica	83

OTROS TITULOS DE LA COLECCION ARGUMENTOS DE LA MISMA EDITORIAL:

- El alma del hombre bajo el socialismo*, de Oscar Wilde.
- La cuestión de los intelectuales*, de Edgar Morin y otros.
- El doctor Spock habla de Vietnam*, de Benjamin Spock y Mitchell Zimmerman.
- El amor en cuestión*, de Herbert Marcuse y otros (segunda edición).
- La revolución erótica*, de Lawrence Lipton (segunda edición).
- Tarzán al desnudo*, de Francis Lacassin y otros.
- La revolución erótica en las artes*, de Lawrence Lipton.
- La revolución sexual en Suecia*, de Birgitta Linnér.
- Historia sentimental del cine norteamericano*, de Rodolfo Izaguirre.
- La nueva imagen del hombre*, de Herbert Marcuse y otros.
- Partido y revolución*, de Pierre Broué y otros.
- El lenguaje y los problemas del conocimiento*, de Roman Jakobson, Roland Barthes y otros.
- China sin mitos*, de Pierre Naville y otros.
- ¿Sociedad de consumo o civilización del bienestar?*, de Georges Friedmann y otros.
- Civilización técnica y sociedad de masas*, de Alain Touraine y otros.
- La crisis actual de la política*, de Henri Lefebvre y otros.
- Economía socialista y planificación económica*, de Oskar Lange.
- Drogas, ¿revolución o contrarrevolución?*, de Theodore Roszak y otros.
- El mito de la maternidad en la lucha contra el patriarcado*, de Martín Sagraera.
- El arte en la sociedad industrial*, de Theodor W. Adorno y otros.

- Los intelectuales y la revolución*, de Jean-Paul Sartre y otros.
- Crítica de la civilización y de las ideologías*, de Charles Fourier.
- El amor libre*, de Mijail Bakunin y otros.
- La inflación*, de Ernest Mandel y otros.
-